

Entre la negociación y la guerra: el conflicto armado en el Oriente y el Nororiente de Colombia (1988-1991)*

Por Omar Jaime Gutiérrez Lemus**

* Artículo recibido en mayo de 2010.

Artículo aprobado en agosto de 2010.

** Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia y Magister de la Universidad Externado.

Introducción

Entre los años 1988 y 1991 el país osciló entre las iniciativas de negociación y las ofensivas militares del Estado y las guerrillas. Es una historia que comienza en el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), cuando se realizan las primeras negociaciones con algunos grupos de alzados en armas (Farc, M-19, EPL) y se funda un partido político (Unión Patriótica) nacido de los acuerdos con la primera de estas organizaciones. Es también un momento de crecimiento de los grupos guerrilleros con mayor capacidad política y recursos, en distintas escalas subnacionales, así como de la aparición de los primeros brotes paramilitares. Sin duda, se trata de un periodo crítico¹, en el cual se advierten distintas formas de violencia y conflicto y sobresale la lucha por el poder en el orden local y regional, en espacios allí donde el Estado ejercía bajos niveles de

¹ El término *guerra civil* rara vez se utilizó para calificar la complejidad del momento, por lo menos en algunas regiones; fue más frecuente el sustantivo “guerra”. Desde los círculos poderosos, más ligados al *statu quo*, se habló de guerra contra la sociedad y el Estado, o de terrorismo contra los bienes o intereses de particulares. Desde la otra orilla se sostuvo la existencia de un plan de exterminio de la oposición a través de la “guerra sucia” (véase: *El Tiempo*, 6 de marzo de 1988, 1B y 4B, y 20 de marzo de 1988, 1B y 4B). La dificultad para definir el tipo de conflicto que padecía el país fue característica de los análisis políticos de entonces. Con todo, en este documento se insiste en la articulación de elementos sociales y políticos con las formas de violencia y conflicto armado prevalecientes en distintas regiones.

control y aglutinaba pocas y costosas lealtades, con excepción de la expansión del narcotráfico y de las organizaciones ligadas a esta actividad, fenómeno que ocurre en importantes ciudades, bajo el control del gobierno, y de su paulatino desdoblamiento en estructuras paramilitares de distinto alcance². También fue una etapa de negociaciones y guerra entre la insurgencia y los gobiernos sucesivos (Virgilio Barco y César Gaviria). Todo este panorama caracteriza al país durante los cuatro años señalados y se siente con fuerza en ciertos espacios de relativa marginalidad, en el Nororiente y el Oriente³ colombianos.

En las páginas que siguen se sustenta la idea de que mientras en el plano nacional se mantuvo, con altibajos y obstáculos, una vía abierta al diálogo y a la negociación, a escala local y regional la tendencia que se imponía era el incremento del conflicto armado y la violencia política. Dado el contexto internacional que comenzó a dibujarse a raíz de la implosión del mundo socialista y los vientos de reforma institucional que soplaron en distintos países de América Latina (Medellín, 1989), la mirada que desde los centros de decisión política se tendió sobre las organizaciones guerrilleras fue de menosprecio, mientras se mantuvo la visión de lucha contrainsurgente nacida en los años sesenta, o bien el intento de imponer condiciones estrictas a lo que se consideraba su claudicación inminente. Sin embargo, otro cuadro se apreciaba en ciertas regiones del país, donde las imágenes de la *perestroika* y el *glásnost*, o el repunte de la democracia y la economía de mercado, apenas eran percibidas como novedades por algunos grupos de intelectuales y tecnócratas. En otras palabras, toda la discusión de entonces sobre el “nuevo orden mundial” (Laïdi, 1992; Brzezinski, B., 1997), nacido en 1989, apenas recibía alguna mención en los rincones más apartados. Por el contrario, en la percepción de distintos

² Como se ha advertido, los carteles del narcotráfico manifiestan su presencia social y económica en zonas urbanas (Medellín, Cali) y son proclives a organizar grupos paramilitares en espacios rurales (Puerto Boyacá, San Martín).

³ Se señalan dos contrastes: 1) en el Oriente se incrementa de manera notoria la siembra de coca y la producción de cocaína (Meta, Guaviare); en el Nororiente se percibe la conformación de los primeros grupos paramilitares en zonas rurales (Magdalena Medio); 2) en el Nororiente se recrudece la guerra y la presión sobre los recursos naturales (Arauca, Norte de Santander); en el Oriente (Meta), sectores de izquierda ensayan la participación en elecciones e insisten en el diálogo.

grupos locales y regionales figuraban en el orden del día la crisis que se escenificaba en la lucha por el acceso a los beneficios arrojados por la explotación de los recursos naturales, los brutales enfrentamientos por el poder político (ahora dentro de un marco institucional ampliado), el desplome de la agricultura agroindustrial y otras manifestaciones, como la aparición o el incremento de las superficies sembradas de coca⁴. Es en este convulsionado contexto local-regional donde sobresalen las acciones de distintos grupos guerrilleros como manifestación política de la crisis que se gestaba⁵.

Percepciones de un contexto

En efecto, el año de 1988 se abre con un fenómeno que los editorialistas más destacados no dudaron en calificar como un reto sin precedente de la subversión del orden establecido (*El Espectador*, 26 de enero de 1988, 12A). Los grupos guerrilleros activos en ese entonces (ELN, Farc, EPL, M-19), aglutinados en la recién creada Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (Cgsb)⁶, mostraron su capacidad para poner en marcha acciones, en apariencia sincronizadas, contra el Ejército, la Policía, algunas fracciones políticas regionales, empresas bananeras y de explotación aurífera (Mineros de Antioquia), multinacionales del petróleo (Occidental Petroleum, Chevron, British Petroleum), o Ecopetrol, en zonas de relativa marginalidad. Fue lo que aconteció en Urabá

⁴ Aunque para la época no existe un sistema de monitoreo sobre los cultivos de coca, se tiene noticia de la lenta expansión de éstos en focos diferentes de los originarios (Meta, Guaviare). En efecto, se menciona la existencia o propagación de cultivos de coca en el oriente antioqueño, Catatumbo, Arauca, sur de Bolívar, etc.

⁵ Cabe recordar que el conflicto interno se desenvuelve en un marco internacional de *Guerra Fría*, actualizado en el decenio de 1980 por los sucesos de Centroamérica y la política de Ronald Reagan para enfrentar la amenaza comunista en el *arrière-cour* de los Estados Unidos (Artaud, D., 1995). Se define, entonces como un enfrentamiento ideológico en el cual el tema de la financiación de la guerra irregular con recursos del narcotráfico está subordinado a otras prioridades del momento. Desde 1989, el gobierno de George Bush pondrá mayor énfasis en el problema del narcotráfico como factor de desestabilización hemisférica (Castañeda, 1996). En el plano interno, los grupos guerrilleros se veían a sí mismos como *actores* portadores de un proyecto histórico capaz de “superar la crisis” política y social y, desde sus perspectivas, hicieron propuestas al respecto dentro de la Cgsb y en los espacios abiertos a los diálogos (Caracas y Tlaxcala) con los gobiernos de turno (Barco y Gaviria) y sectores de los partidos políticos y la sociedad (Medina, 2009a).

⁶ Como se recordará, esta instancia se dio a conocer en septiembre de 1987.

(Apartadó), Córdoba (Tierralta, Saiza), oriente antioqueño (Valdivia, Betulia, El Bagre, Yondó), Caquetá (Florencia, Puerto Rico, El Paujil), sur de Bolívar (San Pablo, Cantagallo), centro y sur del Cesar (Pueblobello, Chimichagua, San Pedro, Valledupar, Pelaya), Norte de Santander (Tibú, Hacarí, Teorama, Ocaña, Toledo, Pamplona, Tunebía), Santander (Barrancabermeja, Sabana de Torres, Puerto Wilches, San Vicente de Chucurí), Arauca (Saravena, Arauquita), Boyacá (Cubará, Bojabá, Pajarito) y Casanare (Aguazul, Tauramena). El denominador común de las acciones guerrilleras en el centro-norte y el nororiente del país fue atacar contra los intereses de importantes empresas (plantaciones, oleoductos⁷, campamentos, instalaciones, equipos, funcionarios), mientras en el oriente y el suroriente los enfrentamientos armados y la violencia parecían más relacionados con la proximidad de las primeras elecciones municipales para alcaldes⁸, a efectuarse el 13 de marzo. Además, Barrancabermeja, en el Nororiente, Apartadó en el noroccidente y Florencia o San José del Guaviare en el suroccidente, eran buenos ejemplos de la compleja mezcla de todos estos ingredientes (conflicto armado y violencia política)⁹. Frente a tal situación, algunos solicitaban una ley marcial que permitiera a las Fuerzas Armadas enfrentar de manera integral la amenaza subversiva¹⁰. Al mismo tiempo, en distintos círculos de opinión se saludaban con entusiasmo los efectos de las reformas descentralistas puestas en marcha por los últimos dos gobiernos (Betancur y Barco)¹¹, se concedía amplia importancia a las inversiones del Plan Nacional de Rehabilitación dentro de un plan gubernamental de paz, se sostenía que las negociaciones con las guerrillas deberían conducir a su

⁷ Entre 1986 y 1988 ocurrieron 84 atentados contra el oleoducto, especialmente en el recorrido Caño Limón-Coveñas.

⁸ A pesar del repunte de la producción de coca en el Oriente y el Suroriente del país, dentro del discurso de distintos protagonistas era claro que el asunto clave era la lucha por el poder político.

⁹ Se reportaba el asesinato de militantes de la Unión Patriótica o sindicalistas de la USO en Barrancabermeja, así como de integrantes del Nuevo Liberalismo o sindicalistas y empresarios del banano en Apartadó, o de candidatos liberales y de la Unión Patriótica a las alcaldías de San José del Guaviare y Florencia.

¹⁰ El punto culminante de esta crisis fue el secuestro de Andrés Pastrana, candidato del partido Social-Conservador a la alcaldía de Bogotá, al parecer realizado por un comando del M-19, aunque atribuido después a los “Extraditables”.

¹¹ Un editorial de *La República* (19 de marzo de 1988, 4A) llamó a este periodo “el inicio de la nueva revolución democrática”.

reincorporación definitiva a la vida civil y se advertía sobre su participación en justas electorales; incluso se preveían reformas constitucionales destinadas a amparar estos y otros cambios significativos en la vida política del país¹². Un contexto en apariencia contradictorio, en un país que oscilaba entre la guerra interna y el cambio institucional¹³.

Se trataba, sin duda, de un contexto que era producto de múltiples percepciones y propuestas sobre lo que debería ser el rumbo del país: originadas en el centro y en los altos niveles gubernamentales, construidas por importantes intereses económicos, sustentadas por los grupos guerrilleros, sufridas y contestadas por las regiones; todas, de alguna manera, enfrentadas o en discreta alianza, y en espera de espacios de legitimación y de imposición, cuando no de negociación. En medio de todo lo anterior se vislumbraba una continua puja de intereses y valores regionales y nacionales que alcanzaría traducción política en los procesos electorales y en las particularidades de la violencia política y el conflicto armado en cada periodo y cada localidad. De esta forma, legalidad e ilegalidad se entretejían en un complejo ritmo de acentos regionales y manifestaciones políticas o sociales. Los organismos estatales, de distintos niveles, tampoco escapaban a esa dinámica, como se pone de manifiesto en muchas dimensiones (la lucha contra los carteles de la droga, el surgimiento de los grupos paramilitares, el posicionamiento de elites políticas abiertamente reacias a todo cambio democrático) y, de manera especial, en la suerte corrida, en un extremo, por la Unión Patriótica como resultado de los acuerdos de paz entre el gobierno Pastrana y las Farc, y, en el extremo opuesto, las negociaciones con otros grupos guerrilleros (M-19, Quintín Lame, EPL), que desembocarían en

¹² Se habló, por ejemplo, de celebrar un armisticio y luego un plebiscito (prohibido por la reforma de 1957) para cambiar la Constitución y desde polos opuestos se insistía en ciertas reformas. Álvaro Gómez proponía la elección popular de alcaldes y, en distintos comunicados, el Secretariado de las Farc recalca que la elección popular de alcaldes y gobernadores también era propuesta suya.

¹³ El mensaje de un grupo de ex ministros al Directorio Conservador ilustra sobre el momento político que se vivía: “Cada día hallamos superada la violencia anterior por nuevas formas de delinquir y nuevos sistemas de hacer daño a la comunidad o a los semejantes. Frente a todo esto se palpa la ausencia de Estado (sic), ausencia que constituye la mayor injuria al derecho. Se nos ha declarado una guerra civil que no estamos ganando” (*La República*, 19 de febrero de 1988, 5A).

la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Los hechos posteriores parecen confirmar estas estimaciones.

Los grupos insurgentes

Pese a todo, las conductas de los grupos insurgentes mostraban importantes diferencias. En una línea ascendente, las Farc aspiraban todavía a una negociación que las consolidara en sus zonas de influencia; el ELN definía lentamente su estrategia de “poder popular” y la ponía en marcha combinando la lucha armada y la influencia política; el M-19 reevaluaba su cadena de errores militares y se dirigía a una negociación que lo convertiría en un movimiento político con relativa influencia electoral; el EPL seguiría el mismo camino aunque de forma un tanto más traumática¹⁴, y otras guerrillas los secundarían poco después (Quintín Lame, PRT, Patria Libre, CRS). Sin embargo, entre 1988 y 1991, estas tendencias apenas se insinuaban en el ámbito nacional y repercutían de manera diferenciada en la macrorregión.

El auge de la subversión

Del recuento de hechos del conflicto armado ocurridos en el primer semestre de 1988, el ELN surge como el grupo armado con mayor actividad en Santander, Arauca y Norte de Santander; los cascos urbanos o los espacios muy cercanos a Barrancabermeja, Cúcuta, Saravena y Bucaramanga, aparecen como los escenarios escogidos por su escalada de la violencia. Además de las acciones armadas, este grupo intervenía en paros cívicos, mostraba cercanía con el movimiento político “A Luchar”, retenía a alcaldes y exhibía activa presencia en municipios como Ocaña, Teorama, Convención, Chitagá, Carcasí, Saravena, Cerrito e, incluso, en la colonial y conservadora Pamplona. El grupo guerrillero había superado una etapa de crisis reiteradas ocurridas en los años

¹⁴ Como se recordará, poco después de la desmovilización del EPL el movimiento Esperanza, Paz y Libertad se vio involucrado en hechos de violencia en Urabá.

setenta¹⁵ y alcanzaba un derrotero de acumulación de fuerza¹⁶ en importantes zonas del Nororiente, situación que se mantendría, con variaciones, hasta 1994. Sin embargo, parecía vislumbrarse un hecho de importancia para su sostenimiento político en los años siguientes: la relación con los gobiernos municipales en sus zonas de influencia era crucial para forjar un proyecto de poder a mediano y largo plazo; la reiterada retención de alcaldes en los primeros meses de 1988 era ya un indicador de que la tarea no sería nada fácil para el ELN; la concepción del “poder popular”, nacido y fortalecido en lo social, requería una manifestación política autónoma, so pena de deshacerse en manos de los “políticos de oficio” y en las prácticas electorales tradicionales (el clientelismo, que decían combatir). Más tarde, la reorganización y la ofensiva de los paramilitares en buena parte del Nororiente, a partir de 1996, corroborarían las dificultades para relacionarse con los “políticos profesionales”, en especial en los municipios donde esta guerrilla amplió su presencia durante estos mismos años¹⁷.

No obstante, en los años siguientes la agenda del ELN parecía encaminada a consolidarse como un poder local y regional invisible (en lo político) y como una fuerza que en el nivel nacional enarbolaba las reivindicaciones de exclusividad de los beneficios en la explotación del petróleo y otros recursos naturales (oro y carbón) para las empresas colombianas y sus trabajadores¹⁸, y asimismo como un movimiento que reclamaba la abstención electoral como un arma frente a los vicios del clientelismo y la corrupción; esto último, por lo

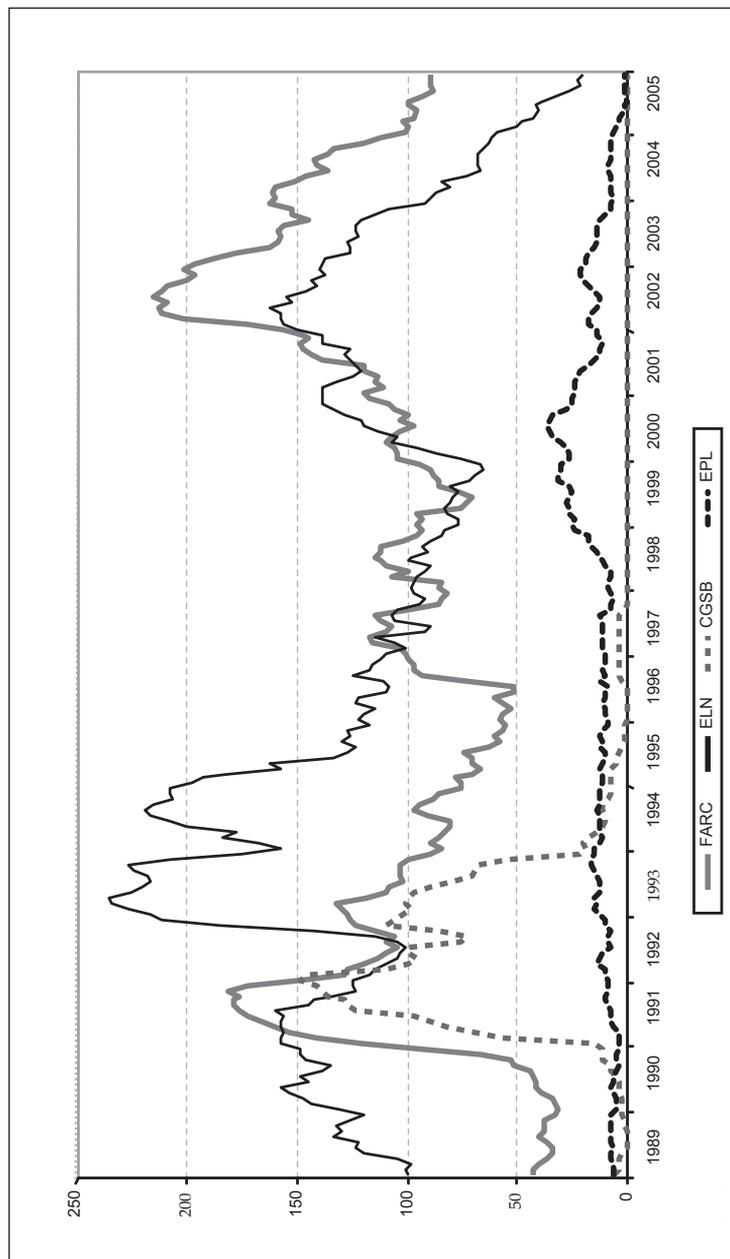
¹⁵ El ELN no se comporta solamente como una guerrilla que ataca a las Fuerzas Armadas y se repliega a lugares apartados: ahora ambiciona influir en la vida política de poblaciones enteras, en las zonas donde opera.

¹⁶ Desde 1987 es perceptible en el ELN una forma de operar mucho más cercana a las reivindicaciones de la población civil donde actúa; con la consigna “el pueblo habla, el pueblo manda” resume esta nueva forma de relacionar lo político y social con la lucha armada, aspectos que se plasmarán durante su segundo Congreso (1989), cuando dio a conocer una concepción de *poder popular* como alterno al emanado del Estado “burgués” (Hernández V., 2006, 2).

¹⁷ Importa advertir que la presencia del ELN era embrionaria en algunos territorios de colonización, como Los Yariquíes (San Vicente y El Carmen de Chucurí), el Sarare y Catatumbo, de donde ensaya un proceso de expansión a zonas de poblamiento más antiguo e integrado a la economía y la política, incluidas algunas ciudades.

¹⁸ Como se recordará, el ELN no solo ejerció presión sobre las empresas transnacionales de petróleo: también lo hizo contra la explotación aurífera en algunos municipios de Antioquia (El Bagre, Zaragoza, Cauca). De cualquier manera, las justificaciones de los atentados contra las petroleras (Shell y Oxy) dividieron a los trabajadores y fueron estimadas por grupos de derecha como justificación para asesinar a sindicalistas.

Gráfico 1
Número de eventos de conflicto por grupo guerrillero responsable
Macrorregión Nororiente-Oriente



Fuente: Base de datos sobre conflicto, Cerac.

menos, dentro de su discurso ideológico. Aún así, el empuje de las relaciones sociales y políticas de los territorios donde actuaba con mayor notoriedad lo llevaba a impulsar marchas y paros cívicos, a intervenir en pequeños asuntos cotidianos de los pobladores y, en especial, a entablar alianzas, apoyos o vetos a los candidatos o mandatarios de turno¹⁹. Esta misma conducta arrastró a los frentes más activos de la organización, ubicados en las provincias de Ocaña, García Rovira, el Sarare y el Catatumbo, a intentar participar de los recursos provenientes de las regalías. Todo esto sucedía en el mismo momento en que se iniciaba la campaña para la elección popular de alcaldes.

Como se advirtió atrás, el ELN había conseguido organizar estructuras políticas y sociales en cercanías o en el interior de importantes ciudades del Nororiente (Barrancabermeja, Cúcuta, Bucaramanga), que sostenían las acciones de su fuerza militar en zonas rurales²⁰. Esta particularidad, que alcanzó gran dinamismo, otorgaría peso específico a distintas “campañas” adelantadas por esta organización sobre las empresas petroleras y los gobiernos locales acusados de mantener vínculos con grupos paramilitares. En ese sentido, el ELN era percibido, tanto por el gobierno como por los “políticos profesionales”, como la mayor amenaza contra el orden²¹. En menor escala otros grupos guerrilleros mantenían alguna presencia urbana. En efecto, el temor que corría en distintos círculos políticos tradicionales era que la apertura de las elecciones populares en localidades y regiones apartadas entregara el poder a guerrilleros y narcotraficantes; las limitaciones del Estado en ciertos espacios y los reveses de las fuerzas militares frente a la guerrilla —más que el narcotráfico— constituían la mayor preocupación:

¹⁹ En febrero de 1988 el ELN, por ejemplo, invitó a nueve alcaldes y tres periodistas a una cumbre en el Nororiente, encaminada a establecer mecanismos para hacer cumplir los acuerdos del paro regional de año anterior. En ese entonces fueron retenidos los alcaldes de Morales, Simití, Aguachica, Ocaña, Convención, Teorema, Chitagá, Cerrito y Carcasa (*Vanguardia Liberal*, 16 de febrero de 1988, 24).

²⁰ Conviene recordar lo orígenes del ELN para captar la importancia de su presencia en ciudades intermedias. La agitación sindical y estudiantil de los años sesenta y setenta ofreció a este grupo un espacio social y político en el Nororiente y el norte del país (Hernández, 2004). Los paros cívicos de la década de 1980 le permitieron penetrar en sectores populosos y marginales de estas mismas ciudades, que crecían rápidamente.

²¹ Así, por ejemplo, en 1988 el ELN adelantó la campaña “Vida y soberanía”, a través de la cual aseguraba que “juzgaría a los responsables de la guerra sucia” en Santander.

“Si se insiste, y es posible que tal cosa se haga, habida la terquedad del Ejecutivo y su ánimo de soluciones dramáticas, en la elección popular de alcaldes en todos los municipios colombianos, serán mucho más de los previstos, los que queden en manos de las guerrillas y bajo la inspiración administrativa y política de los grupos de extrema izquierda. Habrá de suponerse, por forzosa consecuencia, que desaparecen los lazos de unidad entre el gobierno nacional, que no opera, y el municipal, en que actuarán los dirigentes marxistas” (*El Tiempo*, 25 de enero de 1988, 4A).

Por obvias razones, este cambio institucional representaba para la guerrilla otro mecanismo –imprevisto, en el caso del ELN– de afianzar su poder real. De ahí que, desde finales de los años ochenta, la descentralización política se convirtiera en un escenario clave del conflicto y la violencia política en buena parte del Nororiente y el Oriente colombianos. Sin duda, en estos territorios la guerrilla era vista en aquellos años como un poder alterno al Estado. El ELN había creado nuevos frentes, como el Efraín Pabón, que actuaba en las provincias de Ricaurte y García Rovira, o el Capitán Parmenio, que mantenía presencia en Los Yariquíes (San Vicente de Chucurí y Barrancabermeja), o bien había fortalecido otros, como el Armando Cagua en el Catatumbo y la provincia de Ocaña y el Camilo Torres o el Manuel Martínez Quiroz en el Cesar. Por lo demás, de manera menos notoria pero en claro ascenso, el frente Libardo Mora Toro del EPL se fortalecía en los alrededores de Ocaña y se extendía al Catatumbo y al Magdalena Medio, en tanto que las Farc ampliaban su presencia en Arauca (Frentes 10 y 45), Casanare (Frentes 28 y 38) y Catatumbo (Frente 33). El M-19 mantenía pequeñas estructuras urbanas en Bucaramanga y Barrancabermeja y su presencia militar se focalizaba en la subregión de Vélez (Bolívar, El Peñón), Magdalena Medio (Yondó) y el sur del Cesar (San Alberto, San Martín)²².

Sin embargo, como se mencionó arriba, la prueba más clara de este fenómeno político y militar de la subversión puede encontrarse en la experien-

²² Durante este periodo, algunas acciones unilaterales o conjuntas de los grupos guerrilleros fueron presentadas como ordenadas por la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (Cgsb).

cia de la Unión Patriótica en las subregiones del Ariari, Duda-Guayabero y el corredor del río Guaviare, donde se configuraba un poder que, pese a su capacidad de desestabilización regional, buscaba algún tipo de inserción institucional. En efecto, de alguna manera, los grupos guerrilleros que operaban en la macrorregión reacomodaban sus tácticas y discursos al momento que vivía el país: el ELN remozaba su posición antiimperialista con los ataques a las transnacionales y mediante recursos “pedagógicos” o amenazas pedía a los mandatarios rectitud en el manejo de los dineros públicos²³; las Farc apoyaban a la Unión Patriótica, que se preparaba, a su vez, para ocupar el gobierno de algunos municipios²⁴, y ambas organizaciones impulsaban también los esfuerzos que, desde distintas esquinas políticas, proponían una reforma constitucional. Por su parte, el M-19 (minoritario en el Nororiente y derrotado en otros lugares del país, como se dijo) se acercaba al gobierno de Barco Vargas a través de las gestiones del entonces Consejero Presidencial para la Paz y la Reconciliación, Rafael Pardo Rueda, con el fin de entablar una negociación que lo llevaría a abandonar las armas.

Con todo, la violencia se mantenía en el centro del espacio político nacional. En efecto, las Farc se preocupaban por mantener su participación en espacios de negociación con el gobierno mientras la Unión Patriótica sostenía encarnizadas luchas con facciones liberales y conservadoras por el control político de municipios en el Meta, Caquetá, Guaviare, Santander y Norte de Santander. Por esta misma razón, tal vez, mantuvieron unos acuerdos de paz maltrechos con sucesivos gobiernos (Betancur, Barco) y la Unión Patriótica se debatió entre la amenaza de ser aniquilada y su permanencia en cargos de representación nacional (Senado, Cámara de Representantes), departamental

²³ En la mente de los dirigentes de esta organización estaba “crear conciencia” de la importancia política y económica del manejo soberano de los recursos naturales; por esta razón no era extraño que sometieran a los secuestrados a largas “ilustraciones” sobre el particular.

²⁴ Desde la fundación de este movimiento político fueron constantes los señalamientos sobre sus estrechos vínculos con las Farc en distintas regiones y las consecuencias electorales que de esto se derivaban. En julio de 1986, a poco más de un año de su fundación, las Farc señalaron públicamente sus diferencias con la UP, pero enfatizaron el apoyo político que le suministraban al nuevo movimiento político (véase: *El Tiempo*, 8 de julio de 1986).

(Asambleas) o el acceso a los gobiernos locales con las elecciones a alcaldías²⁵. En efecto, a finales de la década de 1980 y comienzos de los noventa esta estrategia fue perceptible en municipios como El Castillo, Vistahermosa, Florencia, Puerto Rico, El Paujil, San José del Guaviare, Barrancabermeja, Sabana de Torres, Cúcuta, Convención y Ocaña. Curiosamente, en Arauca, donde este partido ganaba nuevos espacios (Arauquita, Saravena, Tame), los niveles de violencia política no alcanzaban, por el momento, el dramatismo de las anteriores regiones (véase Tabla 1)²⁶. Mientras tanto, el ELN desarrollaba con relativo éxito sus campañas y proponía una agenda para manejar el problema petrolero con participación de la sociedad, mientras ponía contra la pared la política que en esta materia mantenía el gobierno. Así, este grupo presionó a favor de la creación de un “consejo nacional petrolero” que se encargara de fiscalizar los contratos entre el Estado y las transnacionales²⁷. En este mismo contexto —donde se mezclaban lógicas de participación política legal y violencia—, las guerrillas acertaban a extender su control a ciertos territorios, donde realizaban esporádicas ejecuciones individuales o, bajo determinadas circunstancias, masacres²⁸ y desplazamientos de supuestos auxiliares del Ejército o la Policía, al tiempo que limitaban o prohibían algunas acciones a representantes del gobierno o funcionarios de empresas privadas.

²⁵ Como se sabe, en abril de 1987 se hizo público el rompimiento entre la dirección de la Unión Patriótica y el secretariado de las Farc. La ola de asesinatos contra el movimiento político se hacía sentir con fuerza desde los meses anteriores y, en este contexto, la medida se impuso como una necesidad de sobrevivencia física y política. El ataque de los frentes 14 y 15 de las Farc contra unidades del Batallón Cazadores desplegadas en Caquetá (junio de 1987) marcó aún más la separación entre las Farc y la Unión Patriótica.

²⁶ Nótese que el número de civiles muertos en Caño Limón o Saravena es inferior al registrado, por ejemplo, en Ariari, Los Yariquíes u Ocaña.

²⁷ primera “campana de guerra” del ELN contra la actividad petrolera se realizó en 1987 y se denominó “Despierta, Colombia, nos están robando el petróleo”. A ella le siguieron otras de mayor intensidad. En este caso, lo importante es observar los cambios en las propuestas que ocurren tras los atentados. Como lo señala Pedro Galindo (2002: 73-79), el ELN empieza “denunciando” los aspectos lesivos de los contratos de asociación y termina proponiendo la integración de la política petrolera a planes y programas de desarrollo regional y como parte del temario de la Convención Nacional.

²⁸ En esta época, rara vez se tuvo noticia de la realización de una masacre atribuida a la guerrilla; eran más frecuentes las “ejecuciones” individuales o los asesinatos selectivos. La práctica sistemática y ascendente de este “recurso” fue más bien obra de los paramilitares a partir de 1988.

Tabla 1
Muertos totales en acciones de conflicto

Microrregiones	Subperiodo 1988-1991				
	Civiles	Guerrilleros	Paramilitares	Estado	Total
Altillanura y llanos bajos	18	15	0	34	67
Ariari	111	39	9	41	200
Caño Limón	4	33	0	28	65
Carare-Opón	20	31	0	12	63
Castilla (Meta petrolero)	1	2	0	0	3
Catatumbo	16	29	0	23	68
Centro de Norte de Santander (Río Zulia)	1	5	0	6	12
Comuneros	13	20	0	14	47
Corredor del río Guaviare	0	21	0	7	28
Corredor río Meta-Villanueva	31	2	0	14	47
Cúcuta y zona de influencia	3	23	0	10	36
Cusiana-Cupiagua	15	10	0	5	30
Duda-Guayabero	6	91	0	35	132
García Rovira	14	15	0	13	42
Guanentana	0	8	0	0	8
Ocaña-Aguachica	47	90	0	60	197
Pamplona	2	6	0	16	24
Piedemonte metense	10	1	0	13	24
Prellano y vertiente andina	15	45	0	26	86
Puerto Carreño	0	0	0	0	0
El Sarare	4	72	0	42	118
Soto	49	28	0	43	120
Sureste Norte de Santander (Ricaurte)	0	15	0	2	17
Vélez	18	32	0	7	57
Los Yariquíes	132	128	1	72	333
Macrorregión	530	761	10	523	1.824
Resto	1.867	1.621	46	923	4.457
Colombia	2.397	2.382	56	1.446	6.281

Fuente: Base de datos sobre conflictos, Cerac, elaborada por el autor.

Además, a partir de 1989, tanto el ELN como las Farc ensayan una nueva forma de operar y relacionarse con la población civil del Magdalena Medio (sur de Bolívar, Los Yariguíes) y el Oriente (Saravena, Ariari). Se trataba de la organización de milicias²⁹, que tenían como funciones principales: 1) Desarrollar “trabajo político” permanente dentro de la población civil; 2) Realizar actividades de “inteligencia” y mantener los flujos de abastecimiento para sus respectivos frentes; 3) Contener el avance del Ejército y la Policía en las zonas rurales mediante la organización de pequeñas emboscadas u hostigamientos. Esta forma de operar permitió a la guerrilla romper aún más su aislamiento espacial y social en algunas subregiones y facilitó su influencia en la vida política de los municipios³⁰. Por su parte, el Ejército enfrentó dificultades para neutralizar la influencia de la guerrilla mediante el empleo de sus habituales acciones contra-insurgentes. En opinión del entonces (1990) comandante del Comando Operativo No. 2 de Arauca, esta forma de operar se conocía como *asedio diluido* y hacía muy difícil diferenciar la población civil de los combatientes. Por esa misma época, el ELN conformó los llamados frentes de guerra³¹ y las Farc expandieron su presencia a lo largo de la Cordillera Oriental y el Magdalena Medio.

Para el año 1990, varios frentes del ELN habían roto su aislamiento político en las zonas de colonización y se acercaban a centros regionales neurálgicos. El Frente Solano Sepúlveda extendió su radio de acción (secuestros, acciones bélicas, extorsiones) hasta Magangué, en el centro de Bolívar, y Aguachica, en el sur del Cesar; el Frente Camilo Torres realizó distintas incursiones cerca de

²⁹ El modelo que adoptó el ELN provenía de su experiencia en Arauca. Las Farc crearon las Milicias Bolivarianas a mediados de 1990.

³⁰ Para el ELN esta fue su gran fortaleza, pero poco tiempo después se convertiría en su mayor debilidad porque los paramilitares golpearían precisamente las redes sociales y políticas organizadas en torno a las milicias. De la misma forma, a partir de 2002, las Farc —una vez rotas las negociaciones con el gobierno— tendrían dificultades para controlar a las milicias en algunas zonas de país, en especial las organizadas en las ciudades.

³¹ En el conjunto del país fueron cinco y tuvieron distinto nivel de consolidación; de ellos, el Frente Nororiental fue de los más nutridos en términos de presencia territorial, recursos e influencia política. Los otros cuatro eran: Frente de Guerra Norte (Costa Atlántica), Frente de Guerra Central (Cundinamarca, Tolima, Huila), Frente de Guerra Suroccidental (Cauca, Valle, Chocó, Quindío) y Frente de Guerra Noroccidental (Antioquia, Urabá, Magdalena Medio).

Valledupar y el Frente Armando Cagua llegó a Cúcuta; por su parte, el Frente Capitán Parmenio incursionaba con increíble facilidad en la vía Bucaramanga-Barrancabermeja y mantenía redes de apoyo en estas ciudades. Llegó a ocurrir que la “toma” de algunos municipios de Santander o Norte de Santander se realizara sin que los subversivos dispararan un solo tiro (*Vanguardia Liberal*, 25 de febrero de 1988, 24). Por su lado, algunos de estos frentes incursionaban en los estados venezolanos de Zulia, Táchira y Apure y sostenían algunos enfrentamientos con la Guardia o el Ejército de ese país.

Resulta interesante que, al mismo tiempo, este grupo guerrillero estuviera abierto a cierto intercambio de puntos de vista y, en ocasiones, de búsqueda de consensos con organizaciones sociales y gobiernos locales, por lo menos en momentos decisivos de la confrontación o con ocasión de hechos políticos como la realización de elecciones populares. Sin llegar a generalizar, este proceder marcaba una notable diferencia con su inicial oposición a la elección popular de alcaldes y podía rastrearse en algunas acciones de los frentes Efraín Pabón, en la subregión de García Rovira, o Camilo Torres y Manuel Martínez Quiroz en el centro (Curumaní, Chiriguaná, La Jagua de Ibirico) y el sur del Cesar (Ocaña-Aguachica). Con el incremento de la presencia paramilitar y los operativos de la Policía y el Ejército (1989-1992), el mismo proceder cambió y se tornó menos abierto frente a la población civil y a los políticos locales. Este retraimiento se asoció con el intento del ELN de formar “repúblicas independientes” en García Rovira, Los Yariguíes, el sur de Bolívar y El Sarare. Cabe anotar que este intento de construir “poder popular” tuvo diversas características según la región: parecía funcionar bien en El Sarare y el sur de Bolívar y fue más conflictivo en Los Yariguíes y el sur del Cesar.

A comienzos de la década de 1990, los frentes Solano Sepúlveda y Domingo Laín eran los más activos en el nororiente del país. Aunque el territorio de actividad del primero de ellos era el sur de Bolívar, fueron frecuentes sus incursiones cerca de Aguachica (Cesar), Puerto Wilches (Santander) y Magangué; además, sus redes de abastecimiento e inteligencia mantenían una fuerte presencia en Barrancabermeja. De la misma forma, el Domingo Laín exten-

dió su presencia a Casanare, Boyacá, Santander y Norte de Santander con la fundación de otros frentes que seguían sus orientaciones de “línea dura”. Su fortaleza en términos de recursos económicos y su influencia social y política llevaron a estos dos frentes a tener marcado peso en la dirección nacional del ELN. Una consecuencia territorial de esta expansión insurgente fue la creación de los llamados corredores de movilidad, que años después ocuparían un lugar central en el enfrentamiento con los grupos paramilitares.

En conclusión, al abrirse las negociaciones entre el M-19 y el gobierno de Barco Vargas en 1989, las guerrillas (ELN y Farc) habían alcanzado un importante nivel de expansión territorial y poder político en el Nororiente y el Oriente del país. Prueba de ello fue su contradictoria participación en las primeras elecciones para alcaldes³². En el plano nacional este ascenso las llevó también a sustentar posiciones de fuerza frente al Estado y a buscar espacios de negociación propios, más cercanos a sus intereses y objetivos políticos. Sin embargo, esta posibilidad no se daría con la convocación de la Asamblea Nacional Constituyente ni con la letra de la Nueva Constitución. Tras estos cambios sobrevendrían nuevas oleadas de violencia y otras oportunidades de negociación.

Sorprende un tanto que de la alarma por las acciones guerrilleras puesta de manifiesto entre 1988 y 1989, la percepción de los partidos y del gobierno se transformará poco después (1990-1991) en una relativa subestimación de la amenaza subversiva. A esto pudo contribuir el proceso de negociación alcanzado con algunas de estas organizaciones y al hecho de que en los planos hemisférico y mundial surgían nuevos paradigmas políticos o económicos y se consideraba al comunismo un asunto del pasado. Con todo, en el Nororiente y el Oriente del país ocurrían distintas formas de violencia política y conflicto, así como transformaciones en la organización y operación militar de los grupos guerrilleros y paramilitares.

³² Como ya se mencionó, en algunos casos sabotegó a los candidatos a los gobiernos locales y en otros los apoyó.

Entre la guerra y la paz

No hay duda de que el país se debatía entre los partidarios de una solución negociada del conflicto entre el Estado y las guerrillas y aquellos que presionaban en favor de soluciones de fuerza³³. El asunto clave era que el poder del primero no parecía ser capaz de imponerse sobre todo el territorio nacional ni sobre todas las capas de población, en especial en las zonas de colonización. Aún así, la situación superaba cualquier voluntarismo³⁴. Para algunos sectores políticos de la izquierda y el liberalismo la crisis era sentida como la necesidad frustrada de una profunda reforma política e institucional que permitiera incluir a quienes habían optado por la “crítica de las armas” contra el sistema; en esta escala, la descentralización que se ponía en marcha era apenas una herramienta (mecanismo) para una eventual democratización. En otras palabras, se insinuaba que a las asincronías en las configuraciones territoriales y a los obstáculos de centralización política en las décadas anteriores se sumaban, en ese momento, otras de carácter “subjetivo” y de legitimidad (relación gobernantes-gobernados) que demandaban respuesta, en el mejor de los casos, a través de un proceso de paz o, en el peor, de la imposición coercitiva. Este fue un tema central de la política colombiana en aquellos años, máxime cuando, como se dijo, aparecía un tercer poder en el conflicto: el narcotráfico, a través del paramilitarismo.

³³ Citamos dos ejemplos: 1) En un artículo del periódico *El Siglo* del 15 de mayo de 1988, el general Fernando Landazábal Reyes hace “una propuesta frente a la subversión”. En ella aparece una estrategia muy clara de lo que será la política del Estado frente a la guerrilla en los años venideros. La idea central de la mencionada estrategia antsubversiva estaba en tornarla en una combinación de elementos militares, económicos y sociales y darle continuidad en el tiempo (más de un mandato), como política de Estado y subordinada al gobierno civil; 2) Elsa Blair (1993, 129-162) muestra cómo, en este momento, las Fuerzas Armadas han asumido un papel de marcada independencia frente al gobierno civil en el manejo del “orden público” y actúan de forma articulada con sectores sociales regionales que se oponen a las negociaciones con los grupos guerrilleros. Para Blair, el poder central tampoco ha sido capaz de imponer en ellas una política de seguridad y defensa de largo plazo. La autora señala asimismo que la “lógica de la guerra” no solo era propia de la tradición militar sino que además tenía poderosos partidarios entre sectores de la sociedad civil, quienes invocaban con frecuencia “*la guerra y el tratamiento militar al problema guerrillero y a todo lo que consideraban base social de la subversión*”. Una muestra de esa corriente de opinión puede encontrarse en *La República*, 4 de abril de 1988, 4A.

³⁴ En enero de 1988, el gobierno nacional llegó a considerar la posibilidad de suspender la primera elección popular de alcaldes, dado el nivel de violencia política existente en algunas regiones (Caquetá, Meta, Norte de Santander).

No obstante, ciertos acentos cambiaron de un gobierno a otro. Mientras en el cuatrienio de Betancur Cuartas (1982-1986) se había ensayado una solución política de la guerra bajo un modelo de agenda amplia, que concedía a la insurgencia el carácter de interlocutor legítimo y reconocía la existencia de “factores objetivos y agentes subjetivos” que alimentaban el conflicto armado y la violencia política, en los siguientes gobiernos (Barco y Gaviria) se puso en marcha un modelo de agenda restringida que hacía énfasis en la concentración de combatientes, el desarme y la incorporación a la vida civil (Medina, 2009b). En el primer modelo se priorizaban, además, los planes y proyectos de rehabilitación social y económica de zonas afectadas por el conflicto y se ponían en marcha reformas políticas. Si bien el segundo modelo mantuvo esta agenda de prioridades (Plan Nacional de Rehabilitación), fue enfático en insistir en que todo proceso de diálogo y negociación con la guerrilla debía conducir a su desaparición como grupo armado irregular; en efecto, los gobiernos de Barco Vargas y Gaviria Trujillo combinaron este modelo con la implementación de reformas y cambios institucionales, incluida la convocación de una Asamblea Constituyente³⁵. Cabe anotar que el primer modelo cayó en descrédito dentro de las elites sociales y económicas del país en razón de sus “deficientes resultados” para reducir las acciones de los grupos insurgentes y se impuso un acuerdo para impulsar el segundo modelo.

La estrategia de *agenda restringida* buscaba “bajarles el perfil a los grupos guerrilleros y hacer propuestas más técnicas para enfrentar el problema del conflicto” (Blair, 1993, 153). De ahí su énfasis en los programas y proyectos con la población civil de las zonas de mayor actividad guerrillera o en peli-

³⁵ A lo largo del gobierno de Betancur el Partido Liberal esbozó una crítica a la manera como se había conducido el proceso de negociación con la guerrilla. Hernando Gómez Buendía la resumió en seis puntos: 1. El gobierno, en lugar de planear y de consultar decidió improvisar; 2. Existió confusión en las peticiones recíprocas del gobierno y la guerrilla, así como en los compromisos adquiridos por las partes; 3. Las conversaciones no fueron acompañadas por una “clara y severa” política de orden público; 4. El gobierno se dedicó a conversar en vez de impulsar las reformas políticas y económicas necesarias; 5. El gobierno pretendió situarse como árbitro entre las guerrillas y las Fuerzas Armadas, cuando lo que existía era un conflicto entre “el sistema político y las alternativas dictatoriales de izquierda y derecha”; 6. Haber convertido la paz en un diálogo entre dos minorías –la del Presidente con su equipo y la de los alzados en armas–, cuando “estaba en juego la suerte de todos los colombianos” (*Vanguardia Liberal*, 5 de marzo de 1988, 20).

gro de convertirse en focos de conflicto armado por distintas causas; el gobierno buscaba “construir interlocutores” dentro de esta población y ofrecer soluciones a sus demandas para apartarlos de la vías de hecho (*El Espectador*, 13 de junio de 1988, 1A-11A). En ese sentido, un objetivo determinante era llegar al punto de relegar la negociación con la guerrilla a un segundo plano (Blair, 1993, 154) y convertir a la población en aliado del Estado con el apoyo permanente de las Fuerzas Armadas. Como parte del Estado, las Fuerzas Militares parecían recibir un mayor nivel de respaldo en la ejecución de esta estrategia. De alguna forma, como lo advirtió una periodista, en las zonas de presencia guerrillera el gobierno se propuso dosificar y equilibrar sus funciones “represivas y benefactoras” (Duzán, 1988). Sin embargo, la magnitud de las demandas desbordó la capacidad del gobierno: eran décadas de inactividad del Estado en ciertas zonas, y el recrudecimiento de la “guerra sucia” contra los opositores enturbió a tal punto las cosas, que las pretensiones de dichos programas naufragaron en el cruce de lógicas contradictorias: inversión pública en obras de infraestructura, creación de confianza y control de la población, superación de la pobreza, presencia de la fuerza pública, protección de la inversión privada, todas ellas ligadas en mayor o menor medida a objetivos y medidas que se creían temporales, comprometidas con la lucha contrainsurgente y la “persecución” del narcotráfico³⁶.

Para la época, las guerrillas, con distintos matices, mantuvieron algún espacio abierto al diálogo (incluso a la negociación) con el gobierno nacional en busca de una “solución política del conflicto”, mientras mantenían un lenguaje radical y adelantaban acciones de guerra³⁷. Ante el fracaso del Estatuto para la Defensa de la Democracia (Decreto 180 de 1988³⁸), dada la magnitud de la amenaza subversiva, poco después se abrió paso la Iniciativa para la Paz

³⁶ Nótese que durante estos años, en el Magdalena Medio antioqueño y santandereano (Puerto Berrío, Puerto Triunfo, Cimitarra, Puerto Wilches) la activación de los primeros grupos paramilitares coincide con el hallazgo y destrucción de infraestructura de laboratorios para la refinación de cocaína.

³⁷ En esto el ELN mostraba una posición distinta a la sostenida durante el gobierno de Betancur Cuartas: ahora hablaba de “una solución política al conflicto de la Nación”.

³⁸ La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales algunas partes de este decreto.

(1988). Paradójicamente, el secuestro de Álvaro Gómez Hurtado, connotado dirigente conservador, y la negociación para su liberación, abrieron un espacio para que este diálogo fuera posible, al menos con un grupo minoritario dentro de la guerrilla: el M-19. El gobierno de Barco Vargas (1986-1990) necesitaba con prontitud desactivar distintos factores de violencia que amenazaban con desestabilizar el país, y el M-19 estaba urgido de un espacio político para recuperarse, en lo posible, de los múltiples golpes recibidos luego del fracaso del proceso de paz durante el gobierno de Betancur Cuartas³⁹. Los avances y los retrocesos de las negociaciones con esta y otras guerrillas que se sumarían luego (EPL, Quintín Lame) serían la noticia política recurrente entre 1989 y 1990. Mientras tanto, en el Nororiente y el Oriente, el ELN y las Farc pondrían en práctica acciones de guerra contra las Fuerzas Armadas en un contexto político local que cambiaba muy rápidamente, tras la introducción de la elección popular de alcaldes y la aplicación de otros mecanismos de la descentralización.

Pese al cruce de señales en uno u otro sentido, la guerra irregular prosiguió con marcado acento a lo largo y ancho de esta macrorregión (véase Tabla 1). Lo más preocupante para los organismos del Estado era que la presencia de la guerrilla, en especial el ELN, parecía expandirse en espacios decisivos para la economía y la vida política, como Bucaramanga (provincia de Soto), Barrancabermeja⁴⁰ (Los Yariguíes)⁴¹ y Cúcuta. Además, las autoridades de algunos municipios eran sospechosas de colaborar de una u otra forma con la

³⁹ Con todo, este proceso fue más complejo de lo que aquí se anuncia, descargó verdaderos efectos en la vida política del momento y cambió el rumbo del conflicto armado. Por ejemplo, cada grupo armado irregular (incluido el ELN) tuvo que tomar posición frente a la posibilidad de negociar con el gobierno. No obstante, para la Cgsb fue claro que el M-19, el EPL y otros grupos minoritarios no negociaron más que las condiciones de su desmovilización y las garantías políticas y de seguridad, a fin de no repetir la suerte de la Unión Patriótica (Hernández V., 2006).

⁴⁰ El ELN recibía el 10% de los contratos que adelantaban empresas externas y Ecopetrol en Barrancabermeja, lo que en 1992 representaba cerca de cuatro mil millones de pesos.

⁴¹ Recuérdese la precariedad del control estatal de la carretera Bucaramanga-Barrancabermeja, donde hacían presencia por lo menos dos frentes del ELN (Capitán Parmenio y Manuel Chacón) y otro de las Farc (Frente 12).

subversión o de ser incapaces de mantener independencia frente a ella⁴², cosa que parecía suceder en el Catatumbo, Ocaña-Aguachica, García Rovira y Los Yariguíes; es decir, se podía comprobar la existencia de factores de debilidad institucional que explicaban la expansión de la guerrilla. En consecuencia, lo que desde una óptica nacional podía juzgarse como avances hacia la paz (negociación con grupos armados, reformas institucionales), en el plano local y regional daba pie a interpretarse como un recrudecimiento de la violencia política y la manifestación de poder de los grupos armados irregulares. En el Oriente (El Sarare y Ariari) la cosa era incluso más sorprendente para los sectores recelosos u opuestos a los cambios, dado que allí la Unión Patriótica era gobierno municipal o aspiraba a serlo muy pronto. Así, desde esta perspectiva, el impulso a la modernización del Estado, tan propalado en el decenio de los noventa, nacía, para algunos, “contaminado” por la persistencia de la violencia y el conflicto.

Ciertamente, en algunas subregiones (Ariari, Duda-Guayabero, piedemonte metense) la convocatoria a elecciones locales reactivó hondas divisiones partidistas; políticos y candidatos de turno se encargaron de recordar a sus electores las viejas diferencias ideológicas que separaban a liberales y conservadores y a éstos con los comunistas (Unión Patriótica). Incluso los enfrentamientos entre sectores liberales y de izquierda llegaron a ser muy intensos, como lo ilustran las experiencias del Ariari (Meta) o del Caguán (Caquetá) en las décadas de 1980 y 1990; recuérdense no más los duros enfrentamientos electorales y la violencia desatada en el Caquetá entre el sector político dirigido por la familia Turbay Cote y las Farc, hechos que afectaron el avance de la Unión Patriótica⁴³. Así, en el ámbito regional se entrelazaban dos lógicas que parecían desestabilizar la vida política: el

⁴² Es necesario recordar que por aquel entonces la Unión Patriótica hacía parte de un proceso político en el cual participaban las Farc, y para muchos de sus críticos esto constituía en hecho reprochable en términos electorales, dada la supuesta “presión armada” sobre los votantes.

⁴³ En su momento, este partido negó cualquier relación con los asesinatos de liberales en Caquetá. Por el contrario, denunció el asesinato de casi la totalidad de sus dirigentes en ese departamento (*El Tiempo*, 1 de marzo de 1988, 8A).

ascenso electoral de la izquierda bajo el amparo institucional y la expansión de la “guerra interna” que amenazaba con crear “Estados paralelos” o “contra-Estados” dirigidos por las guerrillas. En este mismo escenario el Estado central parecía, por momentos, desbordado por la acción de poderes sociales y políticos renuentes a las transformaciones institucionales y en mayor o menor medida ligados al conflicto armado; recuérdese lo que ocurría, por ejemplo, en Puerto Boyacá con el fortalecimiento de una compleja corriente narcotraficante y paramilitar (Medina, 1990). Al mismo tiempo, desde algunos ámbitos políticos de alcance nacional se insistía en la necesidad de convocar a distintas fuerzas políticas (incluida la guerrilla) para alcanzar una nueva Constitución, como forma de sellar un tratado de paz, con instituciones renovadas que fueran respetadas por todos los colombianos; como se recordará, esta posibilidad fue defendida por Luis Carlos Galán, jefe del Nuevo Liberalismo, pocos meses antes de su asesinato (*El Colombiano*, 26 de febrero de 1988, 3A).

En esta propuesta, algunos sectores se acercaban a lo expresado por la Cgsb en el sentido de convocar una Asamblea Nacional Constituyente que incluyera al conjunto del movimiento guerrillero y asegurara un verdadero tratado de paz. Desde diferentes ópticas los grupos guerrilleros revaloraban los eventuales beneficios que se desprenderían de una negociación con el gobierno nacional. En el criterio del ELN, por ejemplo, esta era la posibilidad de obtener “conquistas parciales tanto para el pueblo como para las organizaciones revolucionarias” y alcanzar una “mayor aceptación de la población y mayor reconocimiento de los movimientos y gobiernos de otros países”, sin perder de vista la lucha por “las grandes transformaciones que el país reclamaba” (Conclusiones del II Congreso. Poder popular y nuevo gobierno). En otras palabras, para el ELN esto significaba la continuación de la guerra en el escenario de la política (Medina, C., 2009a, 158). Para las Farc implicaba, de alguna forma, proyectar en el tiempo los acuerdos iniciales con el Estado (1985) e insistir en la necesidad de la negociación política en medio del conflicto, hasta alcanzar acuerdos permanentes y definitivos, plasmados en una nueva Constitución.

En sentido paralelo y más allá de los efectos ecológicos y la destrucción de bienes de capital o empleos, tan recalcados en su momento por la prensa, los atentados contra la infraestructura petrolera o minera del país, realizados por algunos frentes del ELN, perseguían presionar al gobierno para entablar una discusión sobre la política seguida frente a la inversión extranjera en el país y abrirse un espacio en las reformas institucionales que, se presumía, ocuparían la actividad de la “alta política” en los años siguientes. De esta forma, mientras a escala regional las luchas por el poder se vinculaban con el conflicto armado, se esperaba que a escala nacional el balance de poder regional colocara a la guerrilla en condiciones que hicieran posible arrancar al establecimiento transformaciones de fondo. Sin embargo, la respuesta gubernamental fue enfática: no negociaría con esta guerrilla un asunto clave para la economía⁴⁴ y la seguridad del Estado como era la política petrolera⁴⁵, posición muy distinta de la asumida frente al secuestro de Gómez Hurtado. Además, los sectores afectados por las acciones del ELN en las regiones (incluido el Nororiente) se deslizaban hacia la utilización de medios similares (ilegales) o más violentos que los utilizados por los subversivos, y la determinación de diferentes sectores políticos y económicos con intereses regionales fue aliarse con unidades militares y narcotraficantes para organizar grupos paramilitares. Frente a esta respuesta, la esperanza del ELN de permear distintos sectores políticos y sociales con sus objetivos frente al Estado central terminó debilitada; no hizo parte de una agenda más amplia de reivindicaciones regionales, afincada en la sociedad civil.

En los días previos a la realización de las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente (9 de diciembre de 1990), el gobierno de Gaviria Trujillo lanzó fuertes operaciones militares en Santander, Arauca y sur de Bolívar (Magdalena Medio). No obstante, el ataque al Secretariado de las Farc en Casa Verde (Uribe, Meta) fue el hecho que marcó el inicio de una nueva fase de

⁴⁴ La guerrilla sostenía que las concesiones petroleras eran lesivas para el país y un excelente negocio para los intereses privados (*El Mundo*, 14 de mayo de 1988, p. 10).

⁴⁵ El Ejecutivo colombiano valoraba positivamente los contratos de asociación creados durante la administración de López Michelsen y los consideraba básicos para estimular la inversión extranjera privada en el país (*El Colombiano*, 12 de mayo de 1988, 1A).

la guerra en toda la macrorregión. En los días y meses siguientes al cierre de la posibilidad de participar en tal asamblea, tanto las Farc como el ELN intensificaron sus acciones (sabotajes, combates, secuestros, etc.) en distintos departamentos (Meta, Santander, Norte de Santander). En efecto, antes y después de este hecho las Farc ponen en marcha –por ejemplo, con la campaña “Comandante Jacobo Arenas, juramos cumplir”– medidas enderezadas a presionar al gobierno para que abriera nuevos espacios de negociación con la Cgsb, objetivo que de alguna forma se conseguiría poco más tarde (junio de 1991), dados los magros resultados de la acción de las Fuerzas Armadas contra la guerrilla.

De cualquier manera, un hecho significativo para el futuro del ELN en el Nororiente fueron los aprendizajes acumulados durante las experiencias de negociación (fallidas o de relativo éxito) de otras guerrillas con los gobiernos de turno o, directamente, como parte de la recién creada Cgsb. En efecto, durante el periodo que va de 1988 a 1992, esta agrupación madura los elementos básicos de su propuesta de Convención Nacional que se dará a conocer más tarde, entre 1998 y 1999; en esta propuesta se enfatiza la necesidad de involucrar a la sociedad civil en el proceso de diálogo y negociación para la superación del conflicto armado. Así mismo, y dentro de esta orientación, el conflicto armado es conceptualizado como derivado e interrelacionado con otros conflictos de carácter social y político⁴⁶. Aun así, los años venideros (hasta 1998) serían de guerra en el Nororiente, por la influencia de distintos sectores sociales y militares decididos a desatar una batalla ilegal contra la subversión y los frentes de lucha más radicales del ELN.

Con todo, en julio de 1991 ya era perceptible que el proceso de negociación entre el gobierno nacional y el M-19 o el EPL había penetrado hondamente

⁴⁶ “Es necesario mirar el conflicto social y político antes que entrar a mirar el conflicto armado. Ahora, los diálogos son un momento de acercamiento para determinar la naturaleza de los conflictos y la posibilidad de entrar en negociaciones (...) para nosotros la conquista de la paz está unida a la solución de los grandes problemas del país, por eso no hablamos solo de diálogo sino también de negociación y eso incluye la solución de esos problemas” (Pérez, 1992, citado por Medina, 1996, 228).

en el ELN y un sector de esta organización era proclive a reincorporarse a la vida civil y a la política electoral. En especial, esta tendencia se manifestaba en los frentes que operaban en el norte (Urabá, Montes de María, Sucre, Bolívar, Magdalena, Atlántico)⁴⁷ y el centro del país (Cundinamarca), aunque era minoritaria en el Nororiente, donde la trayectoria del Frente Domingo Laín desempeñaba todavía un papel aglutinador. En realidad, durante el segundo congreso de esta organización (1989) las diferencias en torno a lo que sería su rumbo político y las negociaciones con el gobierno nacional eran ya reconocibles y fueron profundizándose por injerencia de los frentes Domingo Laín y José Solano Sepúlveda. En el curso del congreso, los sectores más radicales del ELN se alinearon a la defensiva de su “proyecto histórico”, frente a la iniciativa de ciertas facciones internas (MIR, Patria Libre) o de otras organizaciones guerrilleras en el sentido de negociar con el gobierno de Virgilio Barco, tendencia que, a juicio de aquéllos, rompía la unidad de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, y a cambio propusieron una política llamada “Convenio por la vida”, que

“pretende negociaciones parciales para la humanización de la guerra sin comprometer para nada la esencia de su estrategia de guerra popular prolongada. La defensa de los recursos naturales, particularmente del petróleo, podía, también, ser objeto de negociaciones parciales, pero el centro del proyecto revolucionario del ELN de entonces era la estrategia de lucha armada para la toma del poder” (Hernández V., 2006, 2).

En efecto, el ELN lanzó una ofensiva sin precedente que tuvo su punto más alto en el atentado a la planta de refinación de Coveñas, en junio de 1989. El objetivo era abrir un espacio político a través de acciones armadas que tocaran puntos neurálgicos del poder político en Colombia y condujeran a una negociación más amplia con el Estado⁴⁸. Sin embargo, el rompimiento inter-

⁴⁷ Este sector se conocería poco después como Corriente de Renovación Socialista y estaba liderado por Jacinto Ruiz y Gabriel Borja.

⁴⁸ En sus comunicados, los frentes guerrilleros mencionaban la convocatoria a una “gran asamblea del pueblo” para concretar las grandes reformas.

no, lento pero progresivo, con la Corriente de Renovación Socialista llevará a su separación en mayo de 1991 y a su incorporación a la vida civil pocos años más tarde⁴⁹. Frente a las acciones del ELN, el gobierno nacional responde con grandes operativos militares que cubren territorios claves del Cesar, Norte de Santander (Cerrito) Santander (San Vicente de Chucurí), Arauca (Saravena), sur de Bolívar y Casanare. El énfasis de esta agrupación en interferir en la forma como el Estado manejaba el problema petrolero con las multinacionales fue la razón básica para encaminar sobre ella buena parte del esfuerzo bélico; como lo aseveraban con frecuencia distintos círculos influyentes, la derrota del ELN era prioritaria para la estabilidad económica de la nación⁵⁰.

Además, los esfuerzos de ciertos sectores políticos locales por zafarse de la influencia “elena” comenzaban a ser perceptibles en el sur del Cesar y en Santander. Así, los golpes que comienza a recibir el Frente Capitán Parmenio en la subregión de Los Yariguíes (San Vicente y El Carmen de Chucurí) son producto de acciones combinadas del Ejército (Batallón Luciano D’Elhuyar) y núcleos de población civil, algunos de los cuales se aglutinan en las recién creadas autodefensas de San Juan Bosco Laverde. Al mismo tiempo, en Aguachica, San Alberto y San Martín, grupos de paramilitares hacen los primeros intentos de consolidarse alrededor de los intereses agroindustriales y políticos de esa subregión⁵¹. Con características similares, se funda la Sociedad de Amigos de Ocaña (SAO), señalada como responsable del asesinato de dirigentes sociales y políticos de izquierda. Mientras tanto, en Barrancabermeja, desde la sede del Batallón Nueva Granada, el Ejército inicia una sistemática y paciente tarea para romper con el apoyo financiero que sectores económicos de Barrancabermeja venían prestando al ELN. Sin embargo, los golpes emblemá-

⁴⁹ Como se sabe, la Corriente de Renovación Socialista negocia en 1994 un acuerdo de paz con el gobierno de César Gaviria.

⁵⁰ No obstante, el ELN interrumpió por periodos (agosto de 1989-enero de 1990) los atentados contra la infraestructura petrolera, pensando en abrir un espacio a la negociación con el gobierno en la antesala de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente.

⁵¹ En opinión de los grandes propietarios rurales del Cesar y Santander, la violencia guerrillera desestimulaba la inversión productiva y arruinaba el precio de la tierra, de manera que, en algún momento, el primer imperativo para ellos llegó a ser la provisión de seguridad privada.

ticos solo comenzaría a recibirlos a partir de 1992, con la muerte o la captura de algunos de sus dirigentes⁵² y con el enfrentamiento abierto con los grupos paramilitares en algunos municipios de Santander y Cesar (El Carmen y San Vicente de Chucurí, Sabana de Torres, Aguachica y San Alberto).

Las decisiones frente al conflicto

Las negociaciones entre la Cgsb y el gobierno de Gaviria Trujillo ocurren en un marco de relativo avance territorial y político de la guerrilla en el Oriente y el Nororiente, avance que el gobierno no acertó a medir, dado el ambiente de euforia suscitado en Occidente con el derrumbe del mundo socialista, el ascenso hegemónico de los Estados Unidos (Laïdi, 1992), el triunfo de la economía de mercado y, en un plano más doméstico, las expectativas despertadas por las reformas institucionales (políticas y sociales) aplicadas en Colombia y en otros países de América Latina (Medellín, 1989). Se asistía al nacimiento de un nuevo orden mundial y se daba por cerrada la dinámica geopolítica que había dominado al mundo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial (Brzezinski, 1997). Este conjunto de hechos “ideológicos” mundiales e internacionales, sumado a la experiencia de negociación con el M-19, el EPL y otras guerrillas menores, llevó al gobierno a proponer un plan basado en la desmovilización de las estructuras armadas y la negociación de la inserción política y civil de los combatientes. Con motivo de las negociaciones de Caracas, adelantadas en junio de 1991, tal esquema fue rechazado por la Cgsb, que estaba más interesada en la posibilidad de pactar un cese del fuego bilateral, sin condicionamientos previos y con mecanismos de veeduría nacional e internacional (Medina, 2009b, 82).

Entretanto, en su presentación oficial el gobierno no parecía descuidar ningún ángulo de la seguridad y la “modernización” del Estado. Culminó con

⁵² En aquellos años, los organismos de seguridad dan muerte a jefes de frente o mandos del ELN en el Nororiente pero solo con la captura de Gerardo Bermúdez (diciembre de 1992), más conocido como Francisco Galán, y Carlos Arturo Velandia, alias Felipe Torres (junio de 1994), se visibiliza la rudeza de la persecución a esta organización guerrillera.

relativo éxito las negociaciones con algunos grupos guerrilleros; mantuvo en marcha el proceso de descentralización y reforma municipal; puso en práctica medidas para fortalecer la justicia y afianzar la defensa de los derechos humanos; dictó medidas para reducir y someter a las bandas del narcotráfico y se comprometió en una importante reforma institucional a través de la Constitución de 1991. Este conjunto de políticas logró un repunte de la legitimidad del Estado y, en opinión de algunos analistas, conseguiría poco después la reducción de ciertas formas de violencia asociadas al conflicto armado, efectos que se captaron sobre todo en dependencias gubernamentales y en la opinión pública de las grandes ciudades. En el cuerpo de tales iniciativas no estuvo ausente la intención de negociar, conforme cierto modelo, con la guerrilla, agrupada por entonces en la Cgsb. No obstante, el avance político-institucional del gobierno Gaviria en distintos frentes internos, el relativo posicionamiento fáctico de las Fuerzas Armadas en el manejo del orden público⁵³ y el apoyo que éstas recibieron de importantes círculos de poder, las transformaciones económicas mundiales y la urgencia de detener otras amenazas, como el narcotráfico, en el marco de una agenda de relaciones con los Estados Unidos, llevaron al Ejecutivo a asumir una posición rígida en el trato con la guerrilla.

Dos de los más connotados analistas del establecimiento anticiparon esta posición del gobierno de entonces:

“Esta es una guerra que debería ganarse. Más aún: que se puede ganar, ahora que los desarrollos políticos del país, el posible avance del M-19 y las reformas constitucionales a la vista, más lo sucedido en el entorno internacional, invalidan la acción revolucionaria (...) En un acto de supremo pragmatismo, debería negociarse con quien quiere negociar y ganarle la guerra a quien rechaza el diálogo” (Mendoza, P. A., 1990).

⁵³ Esta tendencia se mantuvo pese a la promulgación de medidas para dismantelar los grupos paramilitares, someter a los organismos de seguridad a directrices políticas emanadas del Estado central y asumir mayor responsabilidad en la protección de los derechos humanos.

“La guerrilla en América Latina, como la hemos conocido, comienza a entrar en su ocaso. Subsistirá un terrorismo semejante al vasco en España o al irlandés en Inglaterra, propio de países avanzados. Una operación política exitosa les está dando a los gobiernos de Colombia, El Salvador y Nicaragua, frutos de paz que no se alcanzaron con operaciones exclusivamente militares. Victorias de la lucha armada como las que se registraron en las dos últimas décadas, no son concebibles hoy en día. No solamente por falta de un arsenal en donde la guerrilla pueda aprovisionarse (...) sino por la crisis de credibilidad de la ideología comunista, que hasta ayer inspiraba una fe ciega en su capacidad de solucionar en forma justiciera la organización económica y social de las naciones. En nuestro tiempo nadie considera como una panacea los modelos de desarrollo puestos en práctica en Europa Oriental, desde el Elba hasta los Urales, y otro tanto sucede con las alternativas latinoamericanas de servir de cuna de un socialismo tercermundista” (López, 1990).

En esas circunstancias, durante los ciclos de negociación de Caracas y Tlaxcala, cumplidos entre septiembre de 1991 y marzo de 1992, se abordaron temas de importancia sin que se llegara a acuerdos palpables. La guerrilla, por ejemplo, planteó la necesidad de adaptar un modelo económico distinto del neoliberal, que protegiera la economía nacional —en especial a los sectores rurales— de las eventuales consecuencias del modelo aperturista; insistió en “la necesidad de revisar y modificar los contratos de asociación entre el Estado y las compañías transnacionales” para la explotación de recursos naturales (petróleo, carbón, oro, etc.), con el objetivo de que, en determinado plazo, “revirtieran al Estado y se convirtieran en fuente de recursos para el desarrollo de las regiones marginales y deprimidas”. Se planteó la urgencia de cambiar “la política de guerra total y enemigo interno”, derivada de la “doctrina de seguridad nacional y de la guerra de baja intensidad”, propias de la Guerra Fría; también se mencionó la necesidad de desmontar los grupos paramilitares y castigar a sus promotores y jefes, así como de depurar las Fuerzas Armadas de los individuos involucrados en la “guerra sucia”. De la misma manera se propuso “fortalecer la función social del Estado”, en la perspectiva de “reducir la corrupción, mejorar la eficacia administrativa y garantizar la realización de funciones vitales” (educación,

salud, cultura, vivienda, etc.). Estos y otros puntos aparecieron en lo que se llamó “doce propuestas para construir una estrategia de paz”⁵⁴. Sobra decir que la inspiración filosófica y política de algunas de estas propuestas (Estado y economía) era opuesta a las tendencias que parecían imponerse en el plano mundial⁵⁵; sin embargo, ellas mismas tenían enorme eco en las regiones donde operaban los grupos guerrilleros.

Es importante decir que en las mismas negociaciones se discutió la posibilidad de adelantar “*diálogos regionales*” que involucraran a los gobiernos locales, a las organizaciones sociales, a los partidos, a los empresarios y a distintos sectores de la sociedad civil, aspecto que posibilitaría, en teoría, avanzar con más realismo en la concreción de la paz⁵⁶. Acusadas de “maximalistas”, las propuestas de la guerrilla fueron desestimadas por el gobierno nacional y distintos sectores de la sociedad civil dominante. En octubre de 1992 se abre paso un nuevo periodo de conflicto, bautizado por el presidente Gaviria Trujillo como de “guerra integral” a la subversión. En efecto, la decisión de buscar la derrota militar y política de la guerrilla por el camino de la guerra estaba afianzada, por una parte, en el fortalecimiento de los sectores (militares y sociales) cercanos a la mencionada lógica de la destrucción del enemigo interno, tendencia que arranca y se fortalece, lentamente pero con claridad, desde la administración Turbay Ayala (Blair, 1993, 131-139). Pero, de otra parte, con cierta ironía, se apoyó en la opinión de importantes y nuevos sectores sociales y políticos que habían participado en la Asamblea Constituyente y que, atrapados en la lógica

⁵⁴ Otros puntos fueron: vigencia y respeto de los derechos humanos, fortalecimiento de la justicia, garantías electorales y participación ciudadana, reforma agraria y desarrollo rural, integración y unidad nacional, indemnización a los afectados por la violencia política.

⁵⁵ Para mencionar tan solo un ejemplo, la política petrolera impulsada por el gobierno de Gaviria era opuesta a las pretensiones del ELN. Antes que nacionalizar o estatizar esta actividad, se buscaba incentivar la inversión extranjera en exploración y atraer a compañías con tecnologías de punta para el procesamiento del crudo. En los contratos de asociación igualmente se flexibilizaron las reglas del juego (Galindo, 2002, 80-92).

⁵⁶ De hecho, en el pasado, algunas instituciones, como la Iglesia católica, mandatarios locales y gobernadores habían hecho contacto con frentes guerrilleros en algunos departamentos (Caquetá, Santander) y mantenían con ellos algún tipo de interlocución humanitaria. Como resultado de algunos de estos contactos (Vélez, Los Yariquíes) se crearían más tarde iniciativas ciudadanas por la paz y los derechos humanos y, hacia 1996, nacería el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (Pdpmmm).

de las recientes transformaciones institucionales, otorgaban poco crédito a las propuestas y al futuro de las organizaciones alzadas en armas.

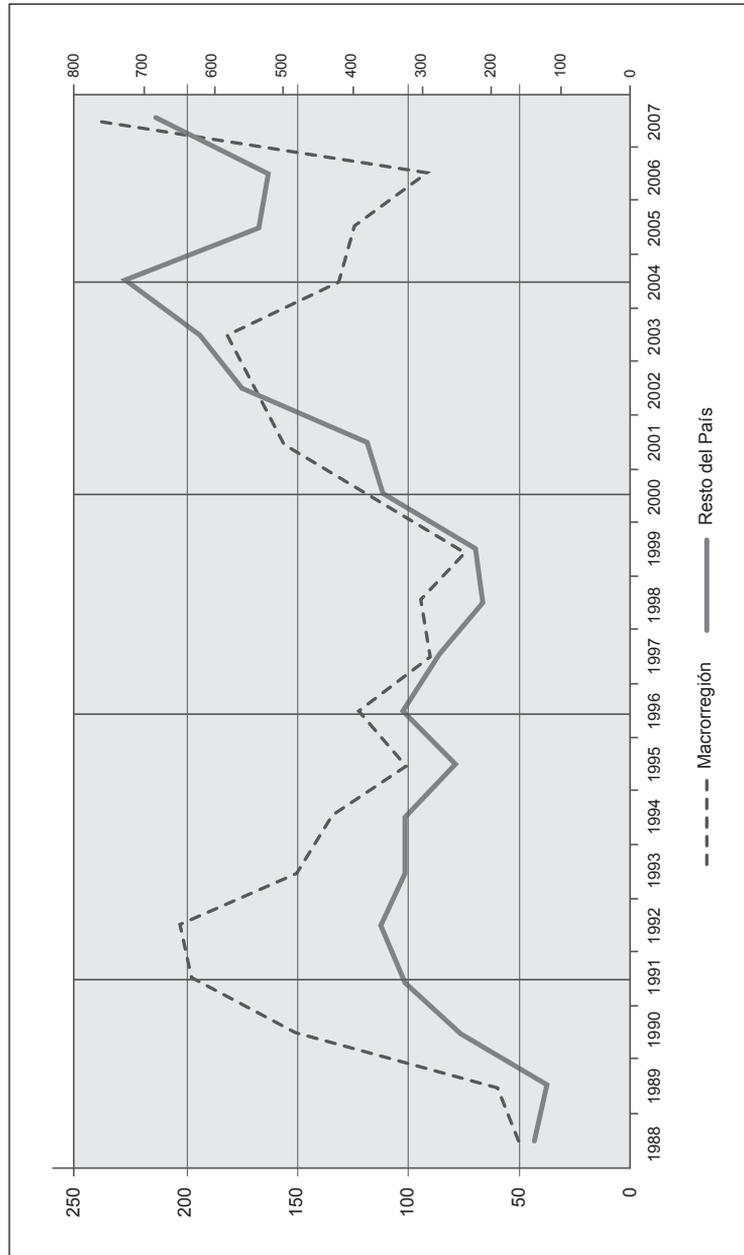
El conflicto y la violencia en las subregiones

En un seguimiento más detallado de los hechos de la macrorregión se aprecia esta tendencia a la confrontación y al sostenimiento de la violencia con motivación política. Como se afirma al comienzo de este trabajo, junto con Urabá, Caquetá y el oriente antioqueño, el Nororiente y algunas subregiones del Oriente eran las más convulsionadas del país. Las graficas que aparecen más adelante ilustran al respecto lo que se refiere a combates de la fuerza pública y la guerrilla en relación con el conflicto armado, y a muertos civiles en acciones del mismo, en lo que se refiere al involucramiento de la población en el mismo fenómeno. Como puede observarse, entre 1989 y 1992, en el Nororiente y el Oriente del país aumenta tanto el número de combates como el de víctimas (civiles y combatientes).

En efecto, aunque las escalas son diferentes, en la macrorregión se percibe una trayectoria de ascenso del número de combates, si se comparan con las cifras disponibles para el resto del país. En el mismo sentido, respecto del número de civiles muertos, la macrorregión parece seguir el sentido nacional por subperiodos. Poco después, entre 1993 y 1995, el número de combates desciende, y entre 1993 y 1997 la cantidad de víctimas también se reduce, aunque en este caso la tendencia es menos pronunciada. Las razones de los cambios posteriores a 1993 ameritan una explicación posterior. Por ahora interesa resaltar lo sucedido entre 1988 y 1992, momento en el cual la opinión mayoritaria u oficial creía que el país se transformaba. Si esto era cierto, la percepción de los mismos cambios no coincidía siempre con lo experimentado por los habitantes de la macrorregión.

En efecto, la exclusión del ELN y las Farc del proceso de la Asamblea Nacional Constituyente llevó a las dos organizaciones a endurecer su discurs-

Gráfica 2
Combates grupos Estatales-Guerrillas
Macrorregión y Resto del país



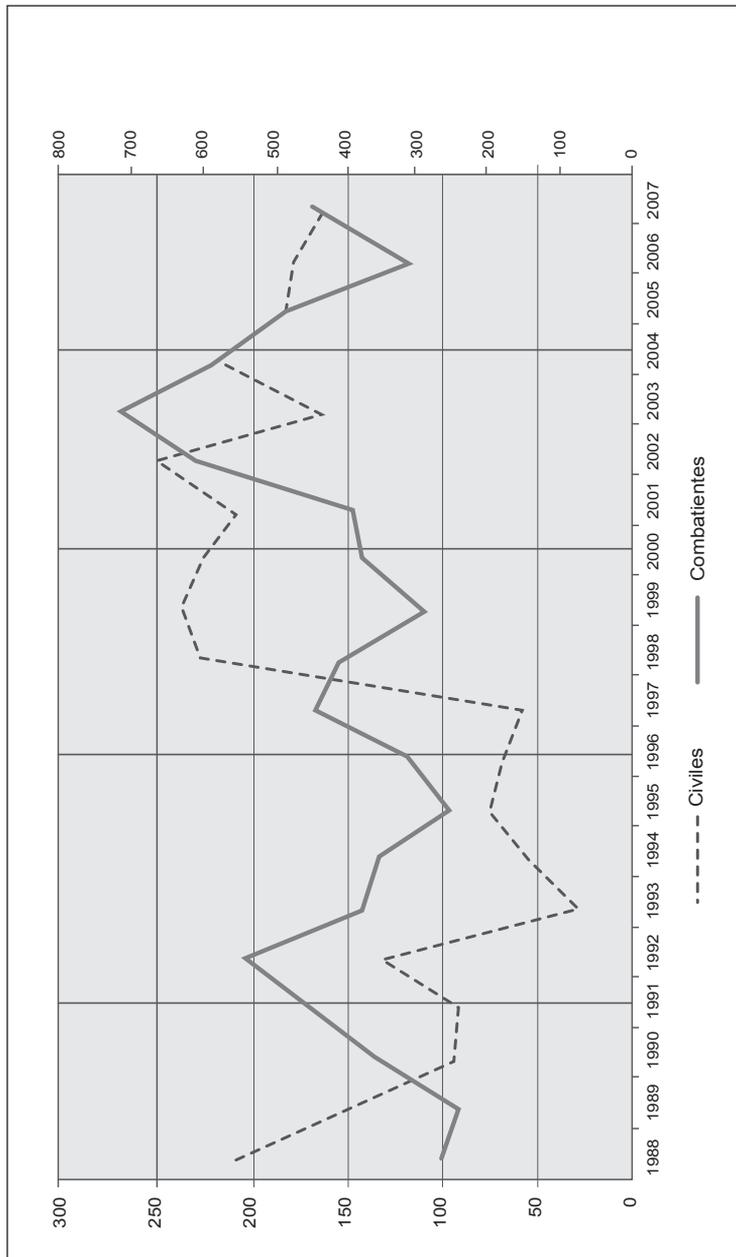
so frente a las reformas de tipo económico que adelantaba la administración Gaviria y a fortalecer su trabajo político en sus zonas de mayor influencia. De alguna manera, con la realización de conferencias y congresos, donde definieron planes para expandir su presencia y control a nuevas comarcas, materializaron un retraimiento político del contexto nacional⁵⁷. Con distintos grados de penetración social, los dos grupos decidieron incursionar en municipios y ciudades más integrados a la economía y a la vida política de la nación (Aguachica-Ocaña, García Rovira, Vélez), primero, con la oposición a los procesos electorales a través del secuestro de alcaldes y funcionarios del Estado, la toma de medios de comunicación y las acciones armadas contra la fuerza pública (1988-1990), y después con la interferencia de las elecciones, el apoyo a ciertos candidatos y el aprovechamiento de los recursos municipales mediante la ejecución de “planes de gobierno” con ciertas características de inversión (1991-1993).

Mientras tanto, sectores políticos regionales cercanos a las Fuerzas Armadas colaboraron o pusieron en marcha estrategias cada vez más sofisticadas para alejar la influencia de la guerrilla sobre la población civil. Estas estrategias incluyeron desde “operaciones psicológicas” y actividades cívico-militares hasta la organización de grupos paramilitares y el exterminio físico de dirigentes de oposición.

Como se señaló al comienzo, algunas subregiones sobresalieron por la intensidad del conflicto y la violencia. En el Ariari, por ejemplo, estos fenómenos están claramente relacionados con la expansión de las Farc a algunos municipios (Cubarral, Granada, San Juan de Arama), las acciones de contención de las Fuerzas Armadas contra la guerrilla en estos mismos territorios y las primeras apariciones de las “escuela” paramilitar de San Martín contra los integrantes de la Unión Patriótica: el registro, en la prensa, de 111 personas (civiles) muertas entre 1988 y 1991, equivalentes al 55,5% de los asesinatos, es

⁵⁷ En realidad, eran directrices para poner en marcha complejos planes económicos, políticos y militares para lanzar una ofensiva generalizada entre 1996 y 1997.

Gráfica 3
Muertos totales en eventos del conflicto en la macrorregión

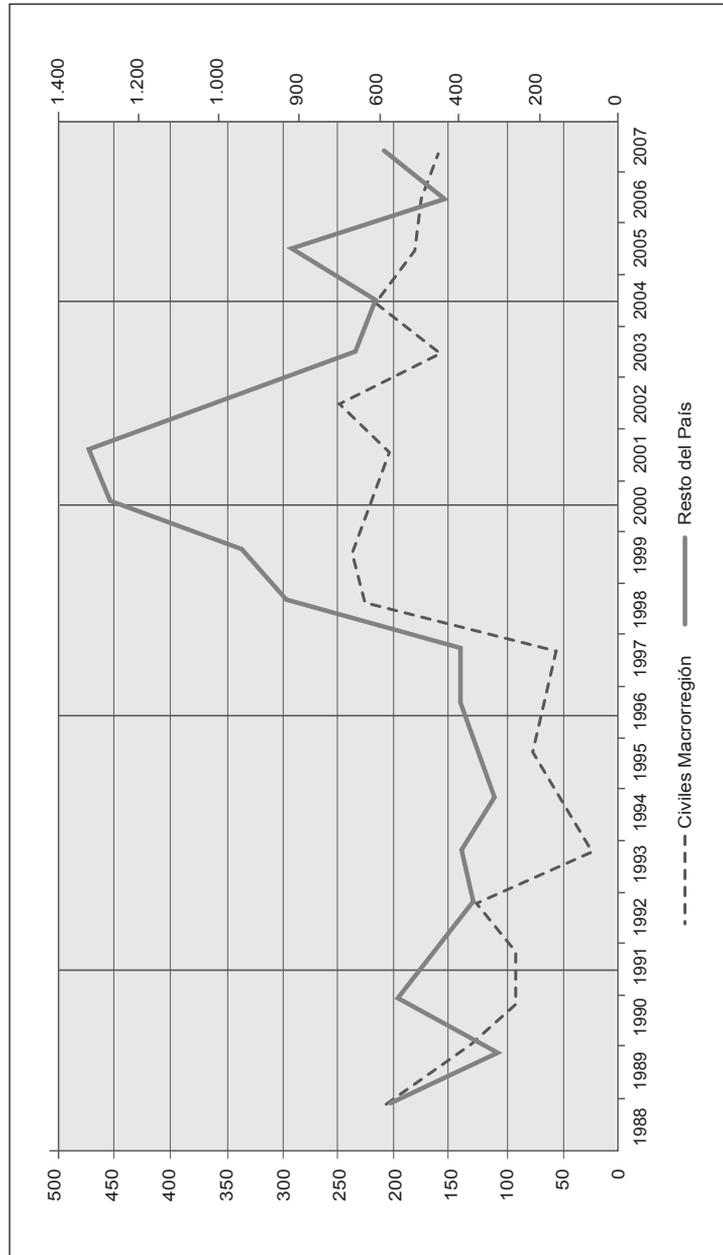


una prueba del acento político del conflicto armado (véase Tabla 1). Las situaciones en Los Yariguíes era incluso más compleja (132 civiles muertos), dado que en ciudades como Barrancabermeja existía una agitación laboral y cívica de importancia, en Sabana de Torres la Unión Patriótica era un partido en auge y en San Vicente y El Carmen de Chucurí se reactivaba la presencia del ELN y las Farc, lo mismo que se organizaban algunas autodefensas. En una expresión parecida, la subregión de Ocaña-Aguachica (47 civiles asesinados) presenciaba la expansión del ELN desde la Serranía del Perijá y el Catatumbo y la reactivación o conformación de nuevos frentes de las Farc; ante la escalada subversiva, sectores civiles y unidades militares organizaban grupos de “limpieza social” y destacamentos paramilitares. Incluso la provincia de Soto (Bucaramanga y sus alrededores) presenciaba la conformación de milicias y las acciones de los frentes urbanos del ELN o los asesinatos “selectivos” de líderes sociales y cívicos, atribuidos a los escuadrones de la muerte (un grupo que se hacía llamar “Mano Negra”). La misma situación afectaba la zona fronteriza, donde las autoridades colombianas y venezolanas enfrentaban las acciones de la guerrilla y el narcotráfico⁵⁸.

En efecto, la declaratoria de *guerra integral contra la subversión* supuso un aumento de la presencia de las Fuerzas Armadas en zonas convulsionadas, tendencia que había activado Barco Vargas desde 1988, y un recrudecimiento de los enfrentamientos con la guerrilla durante los últimos meses de 1992; ritmo que, como se dijo, no fue sostenido y disminuyó, en forma relativa, durante los años posteriores (1993-1996). En su momento se aseguró que esto se debió a que la atención del gobierno de Gaviria se dirigió a combatir el narcotráfico (Cartel de Medellín), mientras su sucesor (Samper Pizano) afrontó una crisis institucional que lo tuvo al borde de la renuncia a la Presidencia, sin avanzar en un proceso decidido de paz o de imposición del Estado sobre la guerrilla. Sin embargo, se puede advertir también que el interés de la opinión pública y de sectores medios de la burocracia institucional estaba sumergi-

⁵⁸ Se suscribían acuerdos para la cooperación militar en la frontera. Véase: *El Colombiano*, 4 de febrero de 1988, 15A.

Gráfica 4
Total de civiles muertos en acciones del conflicto
Macrorregión-Resto del país



do en el análisis y desarrollo de los contenidos de la nueva Constitución; al mismo tiempo, los diferentes grupos de poder regionales se reacomodaban y adaptaban sus expectativas e intereses al mismo marco.

Conclusiones

Entre 1988 y 1991, la presencia de la guerrilla se extendía en varias zonas del país. En el Nororiente, el ELN fortalecía sus frentes y se acercaba a las ciudades intermedias y a las fronteras con Venezuela; en el Oriente, las Farc avanzaban en lo militar y político sobre zonas de población campesina, liberales y conservadoras, dejando atrás sus antiguos refugios de las llamadas “repúblicas independientes”. En Norte de Santander, Santander, Cesar y Arauca las acciones del ELN tenían repercusiones nacionales; en Meta, Guaviare y Caquetá, y esporádicamente en Vichada y Casanare, las Farc realizaban acciones contra la fuerza pública, muy a pesar de la tregua vigente desde 1985. La guerrilla tomaba la iniciativa en la mayor parte de los enfrentamientos y las Fuerzas Militares reaccionaban en defensa de intereses económicos (empresas petroleras, agroindustria) y políticos (realización de elecciones); era una situación reconocida por los propios organismos de seguridad del Estado, comprometedora para el gobierno y que causaba profunda preocupación a las facciones políticas regionales. En este contexto, se temía que las reformas en materia de descentralización política y administrativa de los municipios terminaran favoreciendo a la subversión o fueran utilizadas por ésta para fortalecerse. Un dato adicional que daba aliento a quienes, en estas mismas regiones, estaban organizando grupos de autodefensa y paramilitares encargados de detener, por medios ilegales, a la subversión.

Con los paros y marchas cívicas y campesinas desplegadas en diversas regiones, la guerrilla mostraba que disponía de una base social en aumento. Para ciertos círculos de opinión estas movilizaciones portaban un fuerte “*contenido político y militar*” y constituían un “*pulso de fuerza con las instituciones*” (El Tiempo, 29 de mayo de 1988, 4A). La presión contra el Estado central prove-

nía de distintos frentes o ámbitos regionales y locales, fenómeno que superaba en complejidad política las movilizaciones de los primeros años de la década de 1980; ahora se exigía “*la paz, el derecho a la vida y al trabajo*”; mientras la Cgsb proponía al país la creación de un “*nuevo gobierno, popular y democrático*”. En el mismo sentido, finalizada esta década, la activa presencia de la guerrilla en el Nororiente y el Oriente, al apoyar las peticiones laborales, sindicales o relacionadas con los servicios públicos y la infraestructura social, era una manifestación clara de la manera como estos territorios se pronunciaban sobre la necesidad de su inclusión institucional, en especial de lo que para entonces se consideraba la base social de los insurgentes: colonos-campesinos, trabajadores de multinacionales, proletariado agrícola (jornaleros, trabajadores emigrantes, recogedores de hoja de coca), pobladores de barrios populares y comunas, etc. Esto se evidenció a partir del llamado gran paro del Nororiente, que tuvo lugar en junio de 1987. De esta forma, el ELN en el Nororiente y las Farc en el Oriente construyeron referentes colectivos, no solo actores armados.

Sectores sociales y de opinión pública ligados al orden achacaron el fortalecimiento de la guerrilla a la laxitud militar y política del gobierno de Betancur (*El Siglo*, 15 de febrero de 1988, 5). Los primeros pasos dados por el mandatario en 1984 y 1985 en busca de una paz negociada con la subversión abrieron, en esos sectores, profundos debates y temores sobre los costos económicos y políticos de la incorporación institucional de las reivindicaciones y propuestas de los alzados en armas. La lentitud en las decisiones y las vacilaciones frente al mismo fenómeno por parte de la siguiente administración (Virgilio Barco), sumadas a las limitaciones de las Fuerzas Militares para controlar poblaciones y territorios, elevaron las preocupaciones y la incertidumbre de tales sectores. Hacia 1991 era claro que la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar no repetiría la historia de la negociación y la desmovilización del M-19. La mayor parte del ELN y el conjunto de las Farc, así como una disidencia del EPL, aspiraban a consolidar su poder militar y político en las regiones donde operaban, sin desmovilizarse a corto plazo; era un precio muy alto para el gobierno central y para los grupos sociales y económicos dominantes, máxime cuando

los vientos internacionales (reorganización geopolítica) otorgaban la hegemonía a modelos económicos y políticos basados en la supremacía de poderes privados en la economía y favorecían los recortes de funciones, ámbitos de acción e, incluso, soberanía de los Estados.

A escala nacional, los intentos gubernamentales por alcanzar acuerdos permanentes con la guerrilla eran contrarrestados por las tendencias regionales que enfatizaban la lucha legal e ilegal contra la subversión. En el seno mismo del Estado y de la sociedad civil, las tendencias proclives al diálogo y la negociación del conflicto armado chocaban contra los partidarios de la guerra y la represión. Sucesivos gobiernos combinaron las medidas y acciones de coerción con iniciativas de acercamiento e intentos de negociación, y en este ir y venir se hizo fuerte la tendencia a la represión⁵⁹. Con todo, el avance territorial y militar de la guerrilla en distintas regiones impuso al Estado la necesidad mantener una puerta formalmente abierta al diálogo; esto fue lo que se observó en la llamada “Iniciativa para la Paz” (1988) y en los posteriores diálogos de Caracas y Tlaxcala (1991-1992)⁶⁰. En algunas regiones, las acciones oficiales tendientes a recuperar el control político y militar estaban, en la práctica, bloqueadas por la guerrilla o eran impugnadas (esgrimiendo otras razones) por sectores sociales y estatales de extrema derecha o refractarios a los cambios institucionales; en este contexto avanzaba la confrontación⁶¹. Así mismo, mientras el gobierno ensayaba acercamientos con la guerrilla, incrementaba el gasto militar con el apoyo entusiasta de los gremios y los partidos políticos en el poder (Blair, 1993, 156).

⁵⁹ La supuesta independencia de las Fuerzas Militares en el control del “orden público” era sentida por sus propios integrantes con algo de resentimiento. En este sentido, era frecuente que sus representantes demandaran el acompañamiento de la sociedad y el Estado en su lucha contra subversión. Esta percepción matiza la tesis de Elsa Blair y llama a fijar la atención en periodos de mayor “independencia” o “subordinación” de los militares a la política.

⁶⁰ De un seguimiento a los hechos políticos y de conflicto en estos años surge la impresión de que el gobierno de Barco Vargas no tenía clara ni reunía el apoyo entre los sectores dominantes para adelantar una estrategia de paz a fondo con los grupos guerrilleros, tendencias y circunstancias de distinto origen y naturaleza (social, económica, nacional e internacional) abrieron paso a la negociación con algunos grupos en los años postreros del gobierno de Gaviria Trujillo.

⁶¹ Por consiguiente, en las zonas de conflicto los habitantes percibían la actuación del Estado como incoherente; los mismos funcionarios locales (civiles y militares) contradecían las directrices nacionales.

Lo anterior explica por qué en la perspectiva de algunos dirigentes guerrilleros fue tejiéndose la idea de que para los sectores dominantes colombianos (las oligarquías, como les llaman) el recurso al diálogo y la negociación era un componente dentro de una estrategia más compleja de lucha contrainsurgente que busca debilitar los proyectos alternativos de sociedad, orden económico y Estado. En la misma perspectiva, lo importante para estas “oligarquías” sería “relegitimar” su dominación mediante nuevos consensos con sus antiguos opositores u enemigos, y no tanto avanzar en la concreción de resultados dentro de los acuerdos de paz, que involucraran a sectores marginados de la sociedad y la economía⁶². Esta perspectiva tenía cierto eco si se recuerda que, para 1988, importantes sectores de opinión cercanos al Conservatismo y al partido de gobierno sentían que el Estado estaba perdiendo la guerra frente a la subversión⁶³. En el mismo sentido pesaba la relativa autonomía con que los militares asumían las acciones de control del orden público en distintas regiones de la nación. La misma percepción, en cambio, no se tenía con respecto a la violencia provocada por los llamados carteles del narcotráfico y los emergentes grupos paramilitares, que en términos objetivos era tan peligrosa y desestabilizadora del orden (aunque de naturaleza distinta) como la protagonizada por la guerrilla⁶⁴.

En su intento de posicionamiento como fuerza beligerante, el ELN hizo suya la bandera de la nacionalización de los recursos naturales, hecho que lo convirtió en claro objetivo de las Fuerzas Armadas. Según el Ministerio de Defensa, en ciertos municipios este grupo constituía la mayor amenaza para el orden público del país, por encima del narcotráfico y de las Farc. El hecho significativo era que, con los atentados a la infraestructura petrolera y con el secuestro de funcionarios de las transnacionales, el ELN ahuyentaba la inver-

⁶² Esta percepción es corroborada por otros analistas. Véase: Hernández V. (2006).

⁶³ Véase: Carta de ex ministros al Directorio Nacional Conservador (*La República*, 19 de febrero de 1988, 5A).

⁶⁴ El señuelo básico utilizado por los grupos narcotraficantes para ganar la alianza de los grandes propietarios rurales consistió en ofrecer protección a sus bienes e inversiones y, consecuentemente, ejercer coerción contra sus enemigos sociales y políticos (sindicatos, organizaciones campesinas, etc.). Solamente cuando la violencia paramilitar y del narcotráfico se dirigió contra altos funcionarios del Estado y de las clases dominantes, el gobierno asumió medidas para contrarrestarla.

sión extranjera. En años posteriores fue notable el incremento de los sistemas de seguridad del Estado sobre estos intereses. Mientras tanto, las Farc acomodaban su presencia en zonas de producción de coca, donde precisamente la “inversión de capital” era atraída por las condiciones de ilegalidad de la vida económica y social de la nación, y donde los intereses “foráneos” eran menos visibles o defendibles por medios pacíficos o mediante la coacción estatal. En estas zonas el aumento de la seguridad (presencia de la fuerza pública) no se registró de igual forma que en los territorios petroleros o de explotación de otros minerales (carbón, oro). Se trataba, sin duda, de senderos de afianzamiento económico y territorial diferentes, que marcarían también la manera de relacionarse con el Estado, los gobiernos locales y las comunidades.

Ex post facto puede afirmarse que el gobierno cometió un error de percepción frente al fenómeno guerrillero, proceder que no solo fue evidente en el ataque a Casa Verde sino incluso antes, cuando el gobierno de Barco Vargas, por intermedio de la Conserjería para la Rehabilitación, Normalización y Reconciliación, propuso reiteradamente a los alzados en armas un diálogo condicionado al desarme y a la desmovilización⁶⁵. Territorios enteros de colonización de Santander y Norte de Santander, de Arauca y de Meta estaban influidos, en su vida social y política, por frentes de las Farc y el ELN, para los cuales el fenómeno protagonizado por el M19 y el EPL resultaba marginal. Necesariamente este crecimiento no se vio reflejado en el repunte electoral de la izquierda en el ámbito regional; fue, más que todo, una influencia que se mantuvo oculta a los ojos de analistas y se alimentó con la crisis del agro durante los años de impulso de la apertura económica. Las marchas cocaleras de 1996 volverían a mostrar al país el grado de penetración de la insurgencia en amplios sectores rurales y campesinos; obviamente esta penetración tenía diversos componentes, entre los que se incluía la obediencia aceptada y la coerción (Ramírez, 2001). Los militantes de los grupos insurgentes empren-

⁶⁵ Círculos de poder en el Estado, la sociedad y los partidos (Fuerzas Armadas, gremios económicos, dirigentes políticos, medios de comunicación) presionaron a favor de la definición de este modelo restringido de negociación.

dieron la tarea de fijar en estos territorios las fronteras entre un adentro y un afuera, asunto que tenía que ver no solo con los espacios que se creaban sino asimismo con la población que se “incluía” y se “aceptaba” dentro de una noción particular de *comunidad política*⁶⁶.

La Unión Patriótica se debatió entre la ambivalencia de la participación electoral y la lucha armada; entre la lucha por las reformas o por los cambios radicales. El gobierno conminó a sus integrantes a “*deslindar entre las formas de hacer política democrática e imponer las ideas políticas con las armas*”. Este aspecto fue duramente aprovechado por sus enemigos, quienes, de inmediato, identificaron allí el viejo principio leninista de la combinación de todas las formas de lucha. Sin embargo, estos mismos enemigos fueron más determinados y alcanzaron mayor éxito en su objetivo de colaborar con las Fuerzas Armadas e impulsar, al mismo tiempo, grupos de “justicia privada” y paramilitares para asesinar a militantes de la Unión Patriótica o a supuestos integrantes de la guerrilla. Así quedaba claro que la “combinación de todas formas de lucha” era una tentación a la que se rendían tanto los viejos marxistas como la extrema derecha social y política, con el agravante de que ésta estaba apoyada en sus propósitos por integrantes de la burocracia del Estado (incluidos algunos mandos de las Fuerzas Armadas).

La siembra de coca y su procesamiento eran una práctica que se extendía en distintas zonas e involucraba cada vez más a la población, situación que proyectaba la problemática más allá del narcotráfico, auspiciado por los llamados carteles; sin embargo, eran precisamente las acciones delictivas y criminales de éstos las que colmaban la atención de políticos y periodistas. Este descuido alimentaría el descontento de colonos y campesinos a mediados de la década de 1990, cuando se dio inicio a la fumigación sistemática de cultivos de coca. En la perspectiva de las Farc, la bonanza de la coca no se diferencia sus-

⁶⁶ De acuerdo con diversas entrevistas, en esta época se constituyen “territorialidades” gerenciadas, si cabe la expresión, por los grupos insurgentes. Esto sucedió en el Ariari-Güejar, Catatumbo, Perijá, Sarare, y en algunas comunas de Barrancabermeja, Bucaramanga y Cúcuta.

tancialmente de otras ocurridas antes (café, caucho, oro) y debería beneficiar el desarrollo de las zonas productoras⁶⁷; el ELN guardaba distancia de esta posición y pedía a los campesinos, de manera expresa, no sembrar esta planta porque, según ellos, amenazaba con destruir la forma de vida campesina. Sea como fuere, al comenzar la década de 1990 existían algunos focos de cultivo de coca que coincidían con zonas de colonización campesina en la serranía del Perijá, el Catatumbo, el piedemonte araucano, el Ariari y el Duda-Guayabero.

Poco antes de que se abrieran las negociaciones con un sector de las guerrillas, el pulso entre la negociación y la guerra parecían ganarlo los partidarios de esta última, que gozaba de mayor consenso entre los sectores dominantes. Sin embargo, en el juego político y militar se impuso, por escasa diferencia, la decisión del gobierno en el sentido de impulsar un modelo de negociación restringido con aquellas guerrillas que, por sus intereses políticos y sociales, su orientación ideológica o su debilidad militar⁶⁸, estuvieran dispuestas a reconocer “*la legitimidad del Estado como único punto de partida*”. Al mismo tiempo, se apostó a que los grupos insurgentes verían reducidos sus apoyos internacionales, dado el momento de transición internacional y a medida que distintos gobiernos nacionales contrarrestaran los elementos de orden socio-económico que utilizaba la guerrilla para subsistir.

No obstante, el tiempo y las circunstancias que intervenían en las subregiones eran distintos; se percibía una asincronía con el tiempo y los valores de la mundialización formal (democracia liberal y economía de mercado), que ofrecía a la subversión no pocas oportunidades locales, sin que ello diera aliento a un *contra-tiempo regional*, al estilo de lo que ocurría en el Medio Oriente o en el mundo musulmán, donde existían profundas bases culturales e históricas para resistirse a los reacomodamientos que Occidente pretendía extender (Läidi, 1992). En efecto, sin posibilidades de concretar un acuerdo de paz con el go-

⁶⁷ Declaraciones de Jacobo Arenas, Manuel Marulanda y Alfonso Cano en Casa Verde, ante periodistas internacionales, el 15 de marzo de 1988.

⁶⁸ En buena medida el éxito de la negociación con el M-19 obedeció al interés de este grupo en abandonar la lucha armada.

bierno de turno, los principales grupos guerrilleros del país pusieron su acento en fortalecer su poder en algunas regiones (intersticios), en especial allí donde habían nacido en decenios anteriores o donde podían implantarse sin afectar demasiado, a corto plazo, los órdenes social y político⁶⁹ en curso y beneficiarse de algunas fuentes de recursos, como podían ser las rentas del petróleo o de la refinación de la cocaína.

Bibliografía

Archivos, bases de datos y documentos e informes

Cerac, Base de datos sobre conflicto.

Cinep, Archivo de prensa, años 1988-2008.

Duzán, María Jimena, 1988, “Estado represivo vs. Estado Benefactor”, en *El Espectador*, 1 de marzo de 1988, 2A.

Fals B., Orlando, 1996, “Reconocimiento y construcción del Magdalena Medio como entidad territorial emergente”, Memorandum, Bogotá, Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, abril.

González G., Fernán, 1990, “Espacios vacíos y control social a finales de la colonia”, Documentos ocasionales, número 60, Bogotá, Cinep.

-----, 2007, “Poder, cultura ciudadana e institucionalidad”, Bogotá, Odecofi, septiembre.

González A., José Jairo, 2000, “Lógica colectiva insurgente: hacia la guerrilla bienestar”, inédito.

⁶⁹ Como se recordará, en algunas zonas de colonización se impuso “la ley de los compas”, con la cual se intentó establecer reglas en la tala de bosques, la pesca con trasmallo o dinamita, la vida comunitaria y las relaciones familiares o entre sexos. Esta vez lo hacían directamente, sin la mediación de organizaciones o partidos políticos.

Hernández V., Fernando, 2006, “Negociación de paz con el ELN: una aproximación metodológica”, Barcelona, marzo.

Hernández, Milton, 2004, *Rojo y negro: una aproximación a la historia del ELN*, Dirección Nacional del ELN (sin datos de edición ni editorial).

López Michelsen, Alfonso, 1990, “El ocaso de la guerrilla”, en *El Tiempo*, 23 de julio de 1990, 1A-8A.

Medina G., Carlos, 1989, *Consideraciones generales para el tratamiento del fenómeno de la violencia en el Magdalena Medio boyacense*, Mimeo.

Mendoza, Plinio Apuleyo, 1990, “Terminar una guerra, ganar otra”, en *El Tiempo*, 3 de diciembre de 1990, 5A.

Artículos de revistas

Elias, Norbert, 1998, “Los procesos de formación del Estado y construcción de la nación”, en *Historia y Sociedad*, número 5, Universidad Nacional, Medellín.

González, José J., 1989, “Caminos de oriente: aspectos de la colonización contemporánea del oriente colombiano”, en *Controversia*, número 151-152, Cinep, Bogotá.

González G., Fernán, 1989, “*Un país en construcción*”, en *Controversia*, número 151-152, Cinep, Bogotá.

-----, 2007b, “Espacio, violencia y poder”, en *Controversia*, número 189, Cinep, Bogotá, diciembre.

Kalyvas, Stathis, 2001, “‘New’ and ‘Old’ Civil Wars: A Valid Distinction?”, en *World Politics*, Vol. 54, número 1, The Johns Hopkins University Press, October.

Molano B., Alfredo, 1989, “*Colonos, Estado y violencia*”, en *Revista Foro*, número 9, mayo.

Restrepo Luís A., 1990, “Relación entre la sociedad civil y el Estado”, en *Revista Análisis Político*, número 9, enero-abril.

Vargas V., Alejo, 1989, “Tres momentos de la violencia política en San Vicente de Chucurí”, en *Revista Análisis Político*, número 8, septiembre-diciembre.

Zambrano P., Fabio, 1989, “Ocupación del territorio y conflictos sociales en Colombia”, en *Controversia*, número 151-152, Cinep, Bogotá.

Capítulos de libros

Camelo, José Nelson; Pérez G., Luís M. y Guerrero R., Amado A., 2003, “El conflicto armado en el nororiente colombiano”, en Pinilla, Alba Luz; Pérez G., Luís M. y Fuentes R., Anyella, 2003, *Conflicto político & criminalidad: el nororiente colombiano*, Bucaramanga, Universidad Industrial de Santander.

Castañeda, Jorge G., 1996, “América Latina y la terminación de la Guerra Fría: un ensayo sobre la frustración”, en Lowenthal, Abraham F. & Treverton, Gregory F., comp., *América Latina en un mundo nuevo*, México, Fondo de Cultura Económica.

Centeno, Miguel A., 2002, “The Centre Did Not Hold: War in Latin America”, en James, Dunkerley, editor, *Studies in the Formation of the Nation State in Latin America*, London, Ilas.

-----, 2008, “Limited War and Limited States”, en Davis, Diane E., & Pereira, Anthony W., *Irregular Armed Forces and Their Role in Politics and State Formation*, Massachusetts, Institute of Technology.

González, José J., 1998b, “Regionalización y conflicto: Guaviare, Vichada y Guainía. De colonos, guerrilleros y chichipatos, en Iepri/Fescol, *Conflictos regionales. Amazonia y Orinoquía*, Bogotá, Iepri/Fescol.

-----, 2007, “Los paramilitares y el colapso estatal en Meta y Casanare”, en Romero Mauricio, editor, *Parapolítica, la ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos*, Bogotá, Corporación Nuevo Arco Iris.

Laïdi, Zaki, 1992, “Sens et puissance dans le systeme international”, en Laïdi, Zaki, *L'ordre mondial relache*, Paris, Presses de la fondation nationale des sciences politiques.

Molano B., Alfredo, 1987, “La colonización: voces y caminos”, en Molano B., Alfredo, et. al., *La colonización de la reserva de La Macarena. Yo le digo una de las cosas*. Bogotá, Corporación Araracuara.

Montenegro, Armando y Posada, Carlos E., 2001, “Violencia, criminalidad y justicia: otra mirada desde la economía”, en Martínez O., Astrid, *Economía, crimen y conflicto*, Universidad Nacional de Colombia.

Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2003, “Panorama actual sobre el Magdalena Medio”, en Pinilla, Alba Luz; Pérez, Luís M., y Fuentes, Anyella, *Conflicto político y criminalidad: el Nororiente colombiano*, Bucaramanga, Universidad Industrial de Santander.

Pécaut, Daniel, 2004, “Hacia la desterritorialización de la guerra y de la resistencia a la guerra”, en Red de Estudios de Espacio y Territorio (RET), *Dimensiones territoriales de la guerra y la paz*, Bogotá, Universidad Nacional

Peñate, Andrés, 1999, “El sendero estratégico del ELN: del idealismo guevarista al clientelismo armado”, en *Reconocer la guerra para construir la paz*, Bogotá, Editorial Norma- Paz/Universidad de Los Andes.

Reuter, Peter, 2006, “Sobre la coherencia de la política de los Estados Unidos hacia Colombia”, en Camacho G., Álvaro, editor, *Narcotráfico: Europa, Estados Unidos y América Latina*, Uniandes-Ceso, Bogotá.

Romero V., Mauricio, 2007, “Nuevas guerras, paramilitares e ilegalidad: una trampa difícil de superar”, en Romero, Mauricio, editor, 2007, *Parapolítica, la ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos*, Bogotá, Corporación Nuevo Arco Iris.

Youngers, Colleta, 2006, “Drogas, narcoterrorismo y relaciones entre Estados Unidos y América Latina”, en Camacho G., Álvaro, editor, 2006, *Narcotráfico: Europa, Estados Unidos y América Latina*, Bogotá, Uniandes-Ceso.

Libros

Beck, Ulrich, 2000, *Un nuevo mundo feliz. La precariedad del trabajo en la era de la globalización*, Barcelona, Paidós.

Blair T., Elsa, 1993, *Las Fuerzas Armadas. Una mirada civil*, Bogotá, Cinep.

Brzezinski, B., 1997, *The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostategic Imperatives*, New York, Basic Books.

Galindo, Pedro E., 2002, *Petróleo y paz*, Bogotá, Universidad Nacional.

González, Fernán; Bolívar, Ingrid y Vásquez, Teófilo, 2003, *Violencia política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción del Estado*, Bogotá, Cinep.

Guillén M., Fernando, 1996, *El poder político en Colombia*, Bogotá, Editorial Planeta.

Gutiérrez S., Francisco, 2007, *¿Lo que el viento se llevó? Los partidos políticos y la democracia en Colombia 1958-2002*, Bogotá, Grupo Editorial Norma.

- Hobsbawm, Eric, 1996, *Historia del siglo XX*, Barcelona, Crítica.
- Kaldor, Mary, 2001, *Las nuevas guerras*, Barcelona, Tusquets Editores S.A.
- Le Grand, Catherine, 1988, *Colonización y protesta campesina en Colombia: 1850-1950*, Bogotá, Centro Editorial Universidad Nacional.
- López de la R., Fabio, 1994, *Izquierdas y cultura política ¿Posición alternativa?*, Bogotá, Cinep.
- Losada, Rodrigo; Giraldo, Fernando y Muñoz, Patricia, 2005, *Atlas sobre las elecciones presidenciales de Colombia 1974-2002*, Bogotá, Universidad Javeriana.
- Medellín, Pedro, 1989, *La reforma del Estado en América Latina*, Bogotá, Fescol.
- Medina G., Carlos, 1990, *Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia*, Bogotá, Editorial Documentos Periodísticos.
- , 1996, *ELN: una historia contada a dos voces*, Bogotá, Rodríguez Quito Editores.
- , 2009a, *Conflicto armado y procesos de paz en Colombia*, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.
- , 2009b, *Farc-EP. Notas para una historia política*, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.
- Medina G., Carlos, y Téllez A., Mireya, 1994, *La violencia parainstitucional, paramilitar y parapolicial en Colombia*, Bogotá, Rodríguez Quito Editores.
- Münkler, Herfried, 2005, *Viejas y nuevas guerras. Asimetría y privatización de la violencia*, Madrid, Siglo XXI Editores.
- Pinzón de Lewin, Patricia, 1989, *Pueblos, regiones y partidos*, Bogotá, Fondo editorial Cerec/Universidad de los Andes.

Ramírez, María Clemencia, 2001, *Entre el Estado y la guerrilla. Identidad y ciudadanía en el movimiento de los campesinos cocaleros de Putumayo*, Bogotá, Icanh/Colciencias.

Romero V., Mauricio, editor, 2007, *Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos*. Bogotá, Corporación Nuevo Arco Iris/Cerec/Asdi.

Rubio, Mauricio, 1999, *Crimen e impunidad. Precisiones sobre la violencia*, Bogotá, Tercer Mundo Editores/Cede/Uniandes.

Santos, Milton, 1990, *Por una geografía nueva*, Madrid, Espasa Calpe.

Taylor, Peter y Flint, Colin, 2002, *Geografía política. Economía-mundo, Estado-nación y localidad*, Madrid, Trama Editorial.

Tilly, Charles, editor, 1975, *The Formation of National States in Western Europe*. Princeton, Princeton University Press.

-----, 1992, *Coerción, capital y los estados europeos 990-1990*, Madrid, Alianza Editorial S.A.

-----, 2007, *Violencia colectiva*, Barcelona, Hacer Editorial.

Vargas V., Alejo, 1992, *Magdalena Medio santandereano. Colonización y conflicto armado*, Bogotá, Cinep.

Weber, Max, 1977, *Economía y sociedad*, México, Fondo de Cultura Económica, 2 Tomos.

Zamosc, León, 1985, *nBogotá*, Unrisd/Cinep.